

NOTEBOOKS OF GEOPOLITICAL INTELLIGENCE



Violencia y crecimiento económico en Centroamérica: análisis de los efectos económicos de la inseguridad

Silvia Cabrejas María

Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales -UAM



PUBLICACIONES

de la Escuela de Inteligencia Económica y RRII



Título / Title: Violencia y crecimiento económico en Centroamérica: análisis de los efectos económicos de la inseguridad

Autora / Author: Cabrejas María, Silvia¹

Volumen 7, nº: 3, pp., 47 - 75

Fecha: 9 de marzo de 2026

ISSN 2660-6267

Notebooks of Geopolitical Intelligence

Editor Jefe / Editor in Chief: Ángel Rodríguez García-Brazales

Coordinación / Management: Jesús Gil Fuensanta

Editada por la / Edited by the:

Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales [UAM]

School of Economic Intelligence and International Relations [UAM]

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

C/. Francisco Tomás y Valiente, nº 5, Módulo 10, despacho 303

Universidad Autónoma de Madrid

Campus de Universitario de Cantoblanco

28049 MADRID (SPAIN)

Para consulta sobre publicaciones: angel.rodriguez@uam.es

¹ Contacto con el autor: Cabrejas María, Silvia. Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Madrid. E-mail: scabrejasma@gmail.com

Índice de contenidos

1. Introducción	47
1.1. Impacto de la violencia en el contexto centroamericano	48
1.2. Enfoque metodológico y fuentes	49
2. Marco teórico de referencia	49
2.1. Teoría del capital humano (Becker)	49
2.2. Teoría de los costos de transacción (Coase & North)	50
2.3. Teoría del conflicto y del desarrollo (Collier & Hoeffler)	51
2.4. Teoría de la inseguridad y la inversión (Alesina & Perotti)	52
2.5. Modelo de estado débil y crecimiento económico (Acemoglu & Robinson)	52
3. Panorama de la violencia en Centroamérica	53
3.1. Niveles de violencia: homicidios y delitos violentos	53
3.1.1. Tasas de homicidios: Comparación regional y global	54
3.1.2. Evolución histórica de la violencia homicida en Centroamérica	55
3.1.3. Delitos violentos más allá de los homicidios	56
3.2. Presencia de crimen organizado, maras y narcotráfico, y su impacto	57
3.2.1. El fenómeno de las maras	57
3.2.2. El narcotráfico y su influencia	57
3.2.3. Impacto del crimen organizado en las instituciones y la seguridad	58
3.3. Relación entre violencia, migración y remesas	59
3.3.1. Violencia y migración forzada	59
3.3.2. Las remesas como resultado económico del desplazamiento	59
4. Impacto económico de la violencia	60
4.1. Sectores económicos afectados por la violencia	60
4.2. Impacto en la Inversión Extranjera Directa (IED)	61
4.3. Costes económicos directos de la violencia en el PIB	62
4.4. Violencia, pobreza y desigualdad: un círculo vicioso	64
5. Un caso de cambio en la seguridad y violencia: El Salvador	65
5.1. Situación previa	65
5.2. Medidas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele	65
5.3. Indicadores de mejora en seguridad	66
5.4. Críticas, restricciones y opacidad institucional	68
6. Conclusiones	69
7. Referencias bibliográficas	69

Resumen

Este artículo analiza el vínculo entre la violencia, la inseguridad y las limitaciones que imponen al crecimiento económico en Centroamérica, desde un enfoque multidisciplinar y regional. A partir de un marco teórico que incluye las teorías del capital humano, los costos de transacción, el conflicto y desarrollo, la inseguridad y la inversión, y los estados débiles, se examina cómo factores como el crimen organizado, las maras, el narcotráfico y la corrupción impactan en el capital humano, desalientan la inversión extranjera y promueven la migración forzada. El estudio utiliza una metodología mixta y se basa en datos de organismos multilaterales, literatura académica y un análisis de caso centrado en el Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele. La investigación resalta el círculo vicioso entre violencia, pobreza y desigualdad, mostrando cómo la inseguridad es un impedimento estructural para el desarrollo sostenible. Los hallazgos aportan al estudio crítico de la economía del crimen y la gobernabilidad en contextos de gran conflictividad social, sugiriendo directrices para políticas públicas y fortalecimiento institucional.

Palabras clave: Violencia, crecimiento económico, desarrollo sostenible, criminalidad, seguridad pública, instituciones políticas, Centroamérica.

Abstract

This paper analyzes the link between violence, insecurity, and the constraints they impose on economic growth in Central America, from a multidisciplinary and regional perspective. Based on a theoretical framework encompassing human capital, transaction costs, conflict and development, and weak-state theories, it examines how factors such as organized crime, gangs, drug trafficking, and corruption undermine human capital, discourage foreign investment, and drive forced migration. Using a mixed-methods approach, the study draws on data from multilateral sources, academic literature, and a case study of the Plan Control Territorial under Nayib Bukele's government. The research highlights the vicious cycle between violence, poverty, and inequality, showing how insecurity becomes a structural obstacle to sustainable development. The findings contribute to the critical study of the economics of crime and governance in contexts of high social conflict and offer recommendations for public policy and institutional reform.

Key words: Violence, economic growth, sustainable development, crime, public security, political institutions, Central America.

1. Introducción

Centroamérica es una región que, pese a su riqueza cultural, biodiversidad y su potencial estratégico, enfrenta graves desafíos estructurales que desafían su desarrollo económico y social. Uno de sus principales problemas es la violencia, dada en diversas formas como homicidios, crimen organizado, maras, pandillas, narcotráfico, extorsión y corrupción institucional, entre otras. Esto es algo que no sólo afecta a la seguridad de los países, sino que su economía también se ve afectada. Por ello, es necesario ver cómo esta violencia y la inseguridad que genera impiden el crecimiento económico en la región.

En el contexto de Centroamérica nos encontramos que, para estudiar su desarrollo económico debemos de analizar variables no sólo relacionadas con el nivel de renta o de inversión, sino otras como son las tasas de homicidios o presencia de crimen organizado. De hecho, cabe mencionar que la violencia genera altos costes económicos, tanto directos, -como el gasto en seguridad o las pérdidas de capital humano-, como indirectos -como la desincentivación de la inversión extranjera, la migración forzada de profesionales y la informalización del mercado laboral-. Todos estos efectos se traducen en un impacto significativo sobre las economías nacionales, ya que el costo directo del crimen y la violencia supuso, en promedio, el 3,46% del PIB en 2022 en los países centroamericanos, llegando a superar el 4,6% en casos como el de Honduras (Pérez-Vincent et al., 2024). Además, Centroamérica registra algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo, con una tasa promedio de 20,26 homicidios por

cada 100.000 habitantes, cifra muy por encima del promedio mundial de 6,1 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2024).

Mediante este trabajo se busca lograr vincular y analizar la violencia con el crecimiento económico, entendiendo la inseguridad como una variable estructural que condiciona negativamente el desempeño económico en los siete países que conforman Centroamérica, siendo estos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. Se procurará no solo limitarse a describir la violencia sino a buscar cuales son las causas que llevan a que esta sea tan elevada, y que evita que se produzca un desarrollo económico sostenible. Se tratará de contribuir a una comprensión completa y crítica de los desafíos que enfrenta Centroamérica en estas materias.

Además, el estudio incluirá el análisis de un caso concreto de cambio en materia de seguridad y violencia: El Salvador. Se estudiará el Plan de Control Territorial implementado por el gobierno de Nayib Bukele desde 2019, así como el régimen del estado de excepción vigente en el país desde 2022. El estudio abordará la situación previa del país, las principales medidas adoptadas, los indicadores que reflejan una mejora en seguridad y las críticas y opacidad institucional que contiene el Plan.

La investigación parte de una pregunta central: ¿De qué manera limitan la violencia y la inseguridad las posibilidades de crecimiento económico sostenible en Centroamérica?

1.1. Impacto de la violencia en el contexto centroamericano

La región de Centroamérica posee unas características comunes, y es que la criminalidad de estos países no es algo casual, sino una violencia sistemática con raíces estructurales que también está presente dentro de las instituciones. Esta violencia es más significativa en los países que conforman el Triángulo Norte, -El Salvador, Guatemala y Honduras-, y Belice, todos ellos han llegado a tasas de homicidios que superan las de conflictos armados de zonas de guerra. Aunque en la actualidad los niveles se hayan reducido en cierta medida, inseguridad persiste y sigue afectando de forma directa al desarrollo económico.

La pérdida de capital humano es uno de los principales impactos económicos de la violencia. Cabe señalar que, la deserción escolar, la degradación de la salud física y mental, la migración forzada y los homicidios, generan que la fuerza laboral cualificada se vea sustancialmente reducida, y esto limita la innovación y la productividad. Además, las personas más cualificadas se ven forzadas a emigrar en busca de un futuro, y esto hace que el debilitamiento económico sea mayor, incluso aunque manden remesas a sus países de origen, ya que estas a corto plazo alivian la pobreza, pero a largo plazo no son sostenibles ya que se necesita un crecimiento económico endógeno.

De esta forma, disminuye la inversión extranjera directa (IED), así como el emprendimiento nacional. No se tiene interés en invertir en estos países, los costes operativos son mayores, la confianza empresarial es menor y la desincentivación del capital extranjero es mayor. A esto se debe sumar que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas son víctimas de extorsiones y amenazas, obligándolas a cerrar o pasar a la informalidad. Asimismo, el coste directo de la violencia es un porcentaje muy elevado del PIB en estos países, impidiendo que los gobiernos inviertan en sectores básicos como educación, salud o infraestructuras.

Todo esto erosiona la legitimidad de los estados, y se produce corrupción, impunidad y debilitamientos de las fuerzas del orden, creando un círculo vicioso. Por ello, las personas no ven el sentido en denunciar y el desorden social aumenta.

La violencia en Centroamérica no solo representa una tragedia humana, sino que obstaculiza el crecimiento económico. Su impacto es transversal, afectando a todos los sectores y niveles de la sociedad. Asimismo, limita la capacidad de los estados de generar soluciones y llegar a conseguir economías más sólidas.

1.2. Enfoque metodológico y fuentes

Este estudio se ha realizado a partir de un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) para poder analizar la violencia, sus causas y consecuencias, y su repercusión en la economía. Se busca comprender tanto los patrones estadísticos como las medidas que se han tomado para paliar los efectos negativos y sus consecuencias. Gracias a este doble enfoque, podremos abordar un fenómeno multidimensional, cuyas causas y consecuencias van más allá de lo económico.

Además, se ha incluido el análisis del caso reciente de El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele como ejemplo de una política de seguridad que ha transformado el panorama de violencia en el país. Este estudio de caso nos permite comprender cómo determinadas estrategias y políticas públicas pueden alterar y mejorar, al menos en el corto plazo, los niveles de seguridad del país.

La investigación parte de una revisión crítica de literatura académica y de informes de organismos multilaterales, regionales y nacionales. Entre las fuentes utilizadas destacan publicaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Estas instituciones proporcionan datos actualizados sobre tasas de homicidios, IED, gasto público en seguridad, migración y desarrollo humano, entre otras. Además, se han consultado artículos científicos y estudios especializados en economía del crimen, desarrollo institucional y políticas de seguridad.

El análisis se apoya en una revisión de la literatura organizada por marcos teóricos clave, como la teoría del capital humano (Becker), la teoría de los costos de transacción (Coase y North), la teoría del conflicto y del desarrollo (Collier y Hoeffler), la teoría de la inseguridad y la inversión (Alesina y Perotti) y el modelo de estado débil y crecimiento económico (Acemoglu y Robinson).

El área geográfica está compuesta por los siete países centroamericanos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. La comparación entre estos países permite identificar patrones comunes que le dan la unidad de región.

Han existido limitaciones en el estudio, principalmente en la disponibilidad y calidad desigual de los datos estadísticos de los países, lo que a veces ha dificultado realizar comparaciones precisas. Muchas veces no se revelan los datos reales, y no se pueden obtener estadísticas confiables debido a la baja transparencia institucional o el bloqueo de acceso a información pública. Asimismo, las estadísticas oficiales pueden reflejar subregistros, ya que, en estos casos de violencia, los delitos muchas veces no se denuncian. Además, muchas veces no se tiene claro que países componen Centroamérica, por lo que países como México y República Dominicana se encontraban incluidos en algunos informes, y Belice excluido en otros. Sin embargo, se considera que las conclusiones obtenidas son un marco de análisis válido y útil para la comprensión de la relación que existe entre inseguridad y crecimiento económico.

2. Marco teórico de referencia

2.1. Teoría del capital humano (Becker)

Una de las teorías fundamentales para entender el vínculo entre educación, productividad y crecimiento económico es la teoría del capital humano, desarrollada por Gary S. Becker en su obra clásica *Human Capital* (1964). En ella, el autor plantea que la inversión que realizan los individuos en sus capacidades y habilidades, a través de la educación, la formación laboral y la salud, puede derivar en el largo plazo en crecimiento económico. Asimismo, en la toma de la decisión de si invertir o no en su educación, los individuos arbitrarían entre los costos de formarse, incluidos los costos de oportunidad -según los institucionalistas-, y los beneficios que obtendrán en el futuro (Pérez-Fuentes & Castillo-Loaiza, 2016).

Becker considera que, si los individuos poseen conocimientos y un bienestar físico y mental, podrán aumentar su productividad en la fuerza laboral, dando lugar a la impulsión del desarrollo económico sostenible (Odriozola, 2008). Pensaba que, al igual que el capital físico, el capital humano podía generar rendimientos y crecimiento económico.

En el contexto de Centroamérica, región caracterizada por altos niveles de violencia estructural, crimen organizado e inseguridad, el capital humano se ve tremendamente afectado. La exposición a la violencia e inseguridad afecta al desempeño escolar, llevando a ausentismo y deserción. Se ha observado, por ejemplo, que los alumnos expuestos a homicidios en su entorno obtienen calificaciones inferiores en sus exámenes (Pérez-Vincent et al., 2024, p. 95). Asimismo, existen zonas controladas por pandillas donde la violencia es mayor, y tanto estudiantes como profesores deciden no acudir a las aulas temiendo riesgo de extorsión, reclutamiento forzoso, desplazamiento u homicidio. Incluso los niños que viven en una zona que está controlada por una pandilla no pueden asistir a clase si su colegio está en zona de otra pandilla, por miedo a sufrir lo mencionado (International Crisis Group, 2025).

Además, la violencia tiene efectos adversos sobre la salud física y mental de las personas (World Health Organization, 2014). Las víctimas directas de la violencia pueden experimentar altos niveles de estrés, trauma o incluso discapacidades que afecten a sus capacidades de aprendizaje y desempeño (Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, s.f.). A raíz de esto podemos concluir que la competitividad nacional será menor y la fuerza laboral estará menos preparada para un mercado global.

Uno de los efectos más importantes sobre el capital humano en Centroamérica es el fenómeno de la migración forzada. La violencia impulsa la salida de personas, generalmente aquellas con mayor nivel educativo y capacidades profesionales, en busca de mejores oportunidades y entornos más seguros. La organización internacional *Médicos Sin Fronteras* ha señalado que la violencia es el factor decisivo para la migración desde Centroamérica a Estados Unidos (Jaramillo, 2024). En el caso de Honduras, estudios basados en el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), el BID, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) encontraron una correlación entre el mayor nivel de educación y la intención de migrar de los hondureños, los estudios sugieren que las personas con mayor nivel educativo tienen más capacidad para determinar el curso de sus vidas (ver Beek et al., 2022, p. 61). Esto es lo que se denomina *fuga de talentos*, que provoca una doble pérdida, ya que se invirtieron recursos públicos en la educación de estas personas, pero también su potencial productivo se transfiere a los países receptores.

Para medir mejor este impacto, podemos utilizar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, en el que vemos el nivel de desarrollo humano medido en indicadores de salud, educación e ingresos. Según el IDH 2023/2024 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2025), los países centroamericanos registraron valores relativamente bajos en este índice. Panamá alcanzó el valor más alto de la región (0,820), seguido de Costa Rica (0,806). En cambio, países con mayores niveles de violencia como El Salvador (0,674), Nicaragua (0,669), Guatemala (0,629) y Honduras (0,624) se situaron en posiciones considerablemente inferiores en el ranking global. Esta tendencia sugiere que los contextos violentos no solo afectan al bienestar inmediato de la población, sino también las posibilidades de progreso a largo plazo.

2.2. Teoría de los costos de transacción (Coase & North)

La teoría de los costos de transacción, formulada por Ronald Coase (1937) y ampliada por Douglass North (1990) hace referencia a una serie de costos que implican las transacciones como la búsqueda de información, la negociación, el cumplimiento de contratos y la protección de los derechos de propiedad. En los contextos donde existe violencia e inseguridad, estos costos pueden aumentar, generando efectos negativos sobre el funcionamiento de los mercados formales.

La violencia y la inseguridad aumentan estos costos por la incertidumbre que pueden generar estas transacciones. Ante este ambiente de riesgo producido por los costos, tanto las pequeñas empresas

como los individuos tienden a reducir o incluso cesar sus actividades económicas formales (Pérez-Vincent et al., 2024, p. 93). Según un informe de Crisis Group (2007), vemos como la presencia de crimen organizado y maras en la región ha llevado a la extorsión de comerciantes informales. En Honduras, por ejemplo, alrededor del 79% de las pequeñas empresas y el 80% de los comerciantes informales han sido víctimas de extorsión, de igual forma, debilitando la confianza en las instituciones estatales (International Crisis Group, 2017).

Como menciona North, la falta de un marco institucional sólido que pueda garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad, hace que los costos de transacción se incrementen, haciendo que la economía formal vaya a peor y se expanda la economía informal. Esta expansión de la economía informal es una respuesta directa a estos altos costos de transacción. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013), la inseguridad de la región ha hecho que muchos individuos y empresas se vean forzados a operar fuera del marco legal, pudiendo así evitar estos costos que mencionamos.

Además, los mercados ilegales están inmersos en muchos casos en las economías informales. Las redes criminales y de narcotráfico de países como El Salvador, Guatemala y Honduras responden en parte a la ausencia de alternativas económicas viables y seguras.

Según estimaciones del FMI (Plotnikov, 2020), la actividad delictiva generalizada alcanza hasta el 16% del PIB en países como El Salvador y Honduras, o el 7% en países como Guatemala. Esta situación puede perpetuar círculos viciosos de pobreza y violencia, haciendo que no se produzca desarrollo económico.

2.3. Teoría del conflicto y del desarrollo (Collier & Hoeffler)

Una de las aproximaciones más influyentes para comprender la relación entre violencia y estancamiento económico es la formulada por Paul Collier y Anke Hoeffler (2004). Su teoría del conflicto y del desarrollo sostiene que los conflictos armados internos no solo son una consecuencia del subdesarrollo, sino también una de sus causas estructurales más persistentes. Los conflictos internos, además de ser consecuencias del subdesarrollo, son causas directas de que no haya crecimiento económico ni desarrollo sostenible. Explican que esto se debe a que los conflictos hacen que las instituciones se vean deterioradas, las infraestructuras esenciales destruidas y la inversión desincentivada, creando así un entorno de incertidumbre que hace que la actividad económica sea más difícil.

Aunque actualmente en Centroamérica no existe ninguna guerra como tal, vemos altos niveles de violencia, crimen organizado e incluso hay problemas territoriales, por lo que esta teoría puede ser aplicada en este contexto. Según el *Global Study on Homicide* (UNODC, 2023), la tasa mundial de homicidios intencionales fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2021, mientras que en Centroamérica esta cifra asciende a 20,26 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia una situación de violencia muy superior a la media mundial. Estos factores mencionados y la inseguridad que hay, influyen negativamente en la inversión y en el crecimiento económico. En varios informes del Banco Mundial se señala que una reducción de un 10% en los niveles de violencia, podría generar un aumento porcentual de un punto en el crecimiento económico anual de los países más afectados (Jaramillo, 2024).

En esta misma línea, la CEPAL, en el informe *Brechas estructurales en América Latina y el Caribe*, ha subrayado que las disparidades territoriales y la inestabilidad social desincentivan la inversión privada y crean resistencias para la implementación de políticas públicas, lo que afecta de forma negativa al desarrollo económico (Gaudin & Pareyón Noguez, 2020, p.58).

La violencia y el crimen organizado no solo son desafíos que afectan a la seguridad pública, sino a toda la economía en su conjunto. Se genera una inseguridad que desincentiva la inversión, limita el crecimiento económico y perpetúa ciclos de pobreza y violencia.

2.4. Teoría de la inseguridad y la inversión (Alesina & Perotti)

La inseguridad es otro de los factores disuasivos para la inversión privada. La teoría de la inseguridad y la inversión, desarrollada por Alberto Alesina y Roberto Perotti (1996), explica que la inseguridad, generada a partir de factores como la violencia y el crimen organizado, incrementa los costes de transacción, pero a diferencia de Coase, su enfoque no está en los mercados formales, sino en cómo la violencia genera incertidumbre económica que afecta directamente la inversión privada y la acumulación de capital. Esta inseguridad reduce la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, teniendo un impacto negativo en la inversión privada y la acumulación del capital (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2013, p.71).

En Centroamérica, la relación entre inseguridad y desincentivo a la Inversión Extranjera Directa (IED) es particularmente evidente. Según el informe de 2023 de la CEPAL los países de la región que presentan mayores niveles de violencia —como Honduras y El Salvador— registran también los flujos más bajos de IED en comparación con economías vecinas más estables. Estos datos refuerzan la hipótesis de que un entorno de inseguridad actúa como un factor disuasorio clave para los inversionistas internacionales. Costa Rica, siendo uno de los países más seguros de la región, atrajo \$3.673 millones en IED en 2022, mientras que El Salvador, a pesar de la mejora reciente en seguridad, tuvo un saldo negativo de \$-101 millones en 2022 (CEPAL, 2023, p.27). En Guatemala, la IED cayó un 60,9% en ese mismo año, debido a las tensiones sociales e institucionales. En Nicaragua, el 73% de los \$1.294 millones recibidos en 2022 se debe a la reinversión de utilidades, lo que sugiere que es capital ya presente, no nuevas inversiones.

La inversión extranjera es muy importante en economías en desarrollo, como son las centroamericanas, ya que se genera innovación, empleo y modernización, pero con climas de violencia, los inversores no ven atracción en invertir en estos países con violencia y crimen. Así, vemos que esta teoría nos explica como los contextos violentos no solo generan costes sociales, sino que limitan el potencial económico de la región.

2.5. Modelo de estado débil y crecimiento económico (Acemoglu & Robinson)

En su influyente obra *Why Nations Fail* (2012), el premio nobel Daron Acemoglu y James A. Robinson argumentan que la clave para explicar las diferencias en el desarrollo económico entre países radica en la calidad de sus instituciones. Según su modelo, los estados con instituciones extractivas —es decir, aquellas que concentran el poder en manos de una élite y limitan la participación de la mayoría— tienden a generar entornos donde la innovación, la inversión y la competencia son desincentivadas, dando lugar a economías estancadas y vulnerables al conflicto (Martini, 2013). En estos contextos, el poder político no se distribuye de manera inclusiva, y las instituciones carecen de mecanismos eficaces de control, transparencia y rendición de cuentas. Esto favorece la corrupción, el clientelismo y, en muchos casos, la expansión del crimen organizado. Para los autores, el subdesarrollo no es tanta consecuencia de la geografía o la cultura, sino del diseño institucional, que puede perpetuar dinámicas de exclusión, violencia y debilidad estatal que impiden el crecimiento económico sostenible.

En línea con la teoría institucional del desarrollo propuesta por Acemoglu y Robinson, el caso de varios países centroamericanos ilustra claramente cómo las instituciones extractivas y débiles pueden obstaculizar el crecimiento económico y perpetuar dinámicas de violencia y exclusión. En Honduras y Guatemala, por ejemplo, los desafíos en materia de gobernanza y control de la corrupción son persistentes y estructurales. Según el Banco Mundial, en un informe sobre la Gobernabilidad y Anticorrupción en Honduras, podemos ver como la debilidad institucional ha permitido prácticas corruptas y que el crimen organizado se involucre en estructuras estatales (Gurgur et al., 2002). Asimismo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (2019) también ha documentado redes ilícitas que se infiltran entre las instituciones del estado, resultando en una capacidad menor de ejercer control territorial y brindar justicia.

Esta debilidad institucional puede afectar a los estados en numerosas formas, como por ejemplo en la IED. Además, podemos ver otras áreas clave como el control de la corrupción, la calidad regulatoria y el estado de derecho como indicadores de gobernanza del Banco Mundial, en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador. Por ejemplo, en 2022, Honduras obtuvo solo un 17,9/100 en control de la corrupción y un 17,4/100 en estado de derecho; Guatemala un 11,32 y un 13,21 respectivamente, El Salvador un 27,36 y un 24,06 y Nicaragua un 7,55 y un 8,96 (Kraay et al., 2024). Todas ellas son cifras muy por debajo de la media global, evidenciando una fragilidad institucional, y limitando las oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible.

3. Panorama de la violencia en Centroamérica

3.1. Niveles de violencia: homicidios y delitos violentos

América es el continente con la tasa de homicidios más alta del mundo, aunque es importante señalar que existen muchas disparidades entre sus países. Mientras que las cifras de América del Norte, contando con Estados Unidos y Canadá, son relativamente bajas, América del Sur, el Caribe y Centroamérica presentan cifras más elevadas. De hecho, la región con más violencia y tasas de homicidio más altas es Centroamérica (UNODC, 2023, p.24)

A continuación, en la Tabla 1 se pueden visualizar estas diferencias entre las regiones en cuanto a su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, junto con las características principales que explican esas cifras:

Tabla 1: Tasa de homicidios por regiones en el año 2021.

Región	Tasa de homicidios (por cada 100.000 hab.)	Características principales
Canadá	2,07	País con altos niveles de desarrollo humano, fuerte estado de derecho, acceso restringido a armas de fuego y bajos niveles de desigualdad.
Estados Unidos	6,78	País desarrollado y con instituciones fuertes, aunque la alta disponibilidad de armas de fuego y la violencia urbana elevan significativamente la tasa de homicidios.
América del Sur	11,73	Alta presencia de crimen organizado, narcotráfico, desigualdad estructural y, en algunos casos, debilidad institucional. Casos como Venezuela o Colombia elevan el promedio.
Caribe	18,19	Alta violencia urbana vinculada al narcotráfico, pandillas, tráfico de armas y falta de capacidad estatal. Países como Jamaica o Trinidad y Tobago tienen tasas especialmente altas.
Centroamérica	20,26	Región más violenta del continente. Las maras, el crimen organizado, la desigualdad, la debilidad institucional y la impunidad explican las tasas extremadamente elevadas.

Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de UNODC (2024).*

Aunque debemos destacar que los niveles de violencia han variado a lo largo del tiempo y entre países, a partir de los datos disponibles -altas tasas de homicidios, alta incidencia de delitos violentos y percepción de inseguridad de la población-, observamos que hay patrones que no han variado, y que mucha de esta violencia está relacionada con el crimen organizado. Esto no solo condiciona al entorno social y político, sino también al económico, como veremos más adelante.

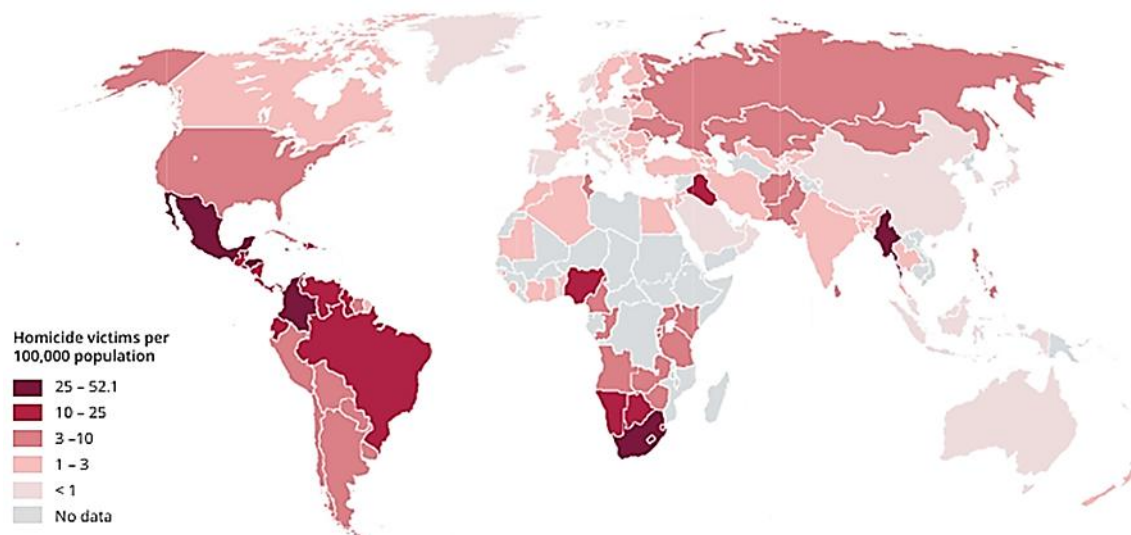
La situación que se vive hoy en día en Centroamérica no puede entenderse únicamente con los datos. El contexto histórico es clave para entender los factores estructurales que dan lugar a estos

niveles de violencia. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua se vivieron conflictos armados prolongados durante las décadas de 1970 a 1990 que causaron una profunda militarización de la sociedad y generaron la descomposición de las estructuras sociales y la desconfianza hacia el estado. Aunque los acuerdos de paz firmados en los años 90 pusieron fin a los conflictos, no abordaron adecuadamente las raíces del problema, como la desigualdad social y la falta de oportunidades. Se desmovilizaron los grupos guerrilleros y los civiles seguían teniendo armamento, por lo que aparecieron estructuras criminales y pandillas, en un contexto de debilidad institucional (Devia Garzón et al., 2014). Por su parte, Honduras, aunque no experimentó una guerra civil, sirvió como base de operaciones de Estados Unidos, por lo que el país se militarizó, y hubo alta corrupción e impunidad judicial. El país tiene una trayectoria de altibajos en cuanto a gobernanza democrática, lo que hace que sus instituciones sean débiles y las redes criminales exploten esta desigualdad (International Crisis Group, 2019). En cuanto a Costa Rica y Panamá, gozan de mayor estabilidad política y menor militarización, pero, aun así, actualmente se ven afectados por el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Por último, Belice, que presenta un sistema institucional debilitado desde su independencia de Gran Bretaña en 1981, también posee índices de desigualdad y pobreza elevados, así como presencia de pandillas.

3.1.1. Tasas de homicidios: Comparación regional y global

Según los datos aportados por el *Global Study on Homicide* elaborado por la UNODC (2023), la tasa mundial de homicidios intencionales fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2021, haciendo un total de 458.000 personas víctimas de homicidio, cifra que quintuplica a las cifras de fallecidos en conflictos armados en todo el mundo el mismo periodo. Asimismo, vemos que América está bastante por encima de esta cifra, con 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y dentro de este dato, los países de Centroamérica tienen estas tasas: Honduras con cifras de 38,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, siguiendo con Belice con 31,3, Guatemala con 20, El Salvador con 17,2, Panamá con 12,6, Costa Rica con 11,4 y, por último, Nicaragua con 11,0. Para hacernos idea de la gravedad de estos datos, países como España tienen una tasa de 0,61 (World Population Review, 2025)

Figura 1: Tasa de homicidio por país o territorio, 2021 (último año disponible desde 2016)



Fuente: UNODC (2023, p.47)

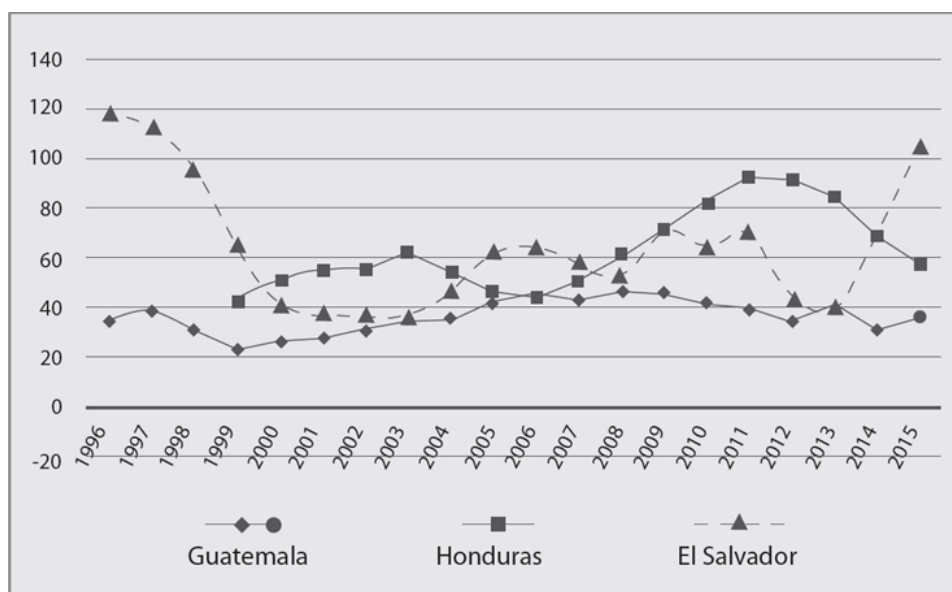
En el mapa que aparece en la Figura 1 podemos ver con más claridad que las zonas más oscuras se encuentran en Centroamérica, y en todo el continente americano más en general, pues sólo 18 países en todo el mundo se encuentran con una tasa mayor a 20 homicidios por 100.000 habitantes, y 14 de ellos se encuentran en América (UNODC, 2023).

3.1.2. Evolución histórica de la violencia homicida en Centroamérica

La evolución de la tasa de homicidios en Centroamérica en las últimas dos décadas ha estado marcada por cifras muy elevadas y por contextos muy diferentes entre los diferentes países, destacándose por encima de todos, el conocido como Triángulo Norte, comprendido por El Salvador, Honduras y Guatemala, donde incluso los niveles de violencia alcanzan cifras de “epidemia” y se equiparan a las cifras de países en situación formal de conflicto armado (Prado Pérez, 2018). Esta ola de violencia que se vive en el Triángulo Norte es primordialmente causada por dos grupos criminales organizados, las maras y los traficantes de drogas (Jiménez, 2016)

La tasa de homicidios en estos países en los años cercanos a 2015, son comparables a las tasas de homicidios que se registraban durante la época de conflictos armados en Centroamérica, es por ello por lo que, se dice que estos conflictos finalizados en los 90 dejaron tras sí una normalización de la violencia y un gran número de armas en las calles (Prado Pérez, 2018). Esto lo podemos apreciar mejor en la gráfica a continuación (ver Gráfico 1) donde vemos como, por ejemplo, en Guatemala, cuando acabó la guerra en 1996, la tasa de homicidios era 35/100.000, y en 2015 la tasa fue de 36/100.000, lo mismo ocurre con El Salvador, pues tanto en 1996, como en 2015, sus tasas superan las 100/100.000.

Gráfico 1: Tasa de homicidios en el Triángulo Norte (1996-2015)



Fuente: Prado Pérez (2018)

Debemos, asimismo, destacar que El Salvador tuvo su punto más crítico en 2015, con una tasa de 107 homicidios por cada 100.000 habitantes, la mayor del mundo en ese año y una de las más elevadas jamás registradas fuera de zonas de conflicto armado. Desde entonces, y sobre todo con el gobierno de Nayib Bukele, las cifras se han reducido considerablemente alcanzando el dato de 7,8/100.000 en 2022.

Honduras no se quedaba atrás, e incluso fue considerado por el estudio *Global Burden of Armed Violence, 2015*, como el segundo país más violento del mundo, por detrás de Siria (Prado Pérez, 2018). Sus tasas de homicidios en la primera mitad de 2010 se encontraban por encima de 85/100.000. Aunque en los recientes años haya mejorado, sigue siendo uno de los países con las tasas más altas en todo el mundo.

Guatemala, por su parte, ha mostrado una evolución similar, pasando de una tasa de homicidios en 2009 de 46/100.000 a una de 20/100.000 en 2021. De igual forma, el crimen organizado, la impunidad y la debilidad institucional siguen siendo obstáculos para que se reduzca la violencia.

Por otro lado, el resto de los países de Centroamérica han seguido trayectorias diferenciadas.

Belice, a pesar de que sea un país pequeño y con menor población que el resto, ha experimentado tasas altas de homicidios, sobre todo entre 2010 y 2015, superando las 40/100.000 (Banco Mundial, s.f.). No obstante, esta tasa se ha reducido hasta 27,9/100.000 en 2022. En el país, los homicidios están vinculados al tráfico de drogas, las pandillas y la debilidad institucional.

En contraste, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, han presentado niveles más bajos y estables de homicidios en comparación con los otros 4 países de Centroamérica. Estos países han compartido una relativa estabilidad en relación con los homicidios, aunque hay que destacar que, en los años recientes, y como podemos ver en la Tabla 2 a continuación, las cifras se están elevando, esto es debido al aumento del narcotráfico, las redes criminales transnacionales y el crimen organizado (UNODC, 2023).

Tabla 2: Nivel de homicidios en Centroamérica, 2019-2022 (total y tasa por 100.000 habitantes)

	2019		2020		2021		2022	
	TOTAL	Tasa	TOTAL	Tasa	TOTAL	Tasa	TOTAL	Tasa
Costa Rica	563	11,1	570	11,1	588	11,4	664	12,8
El Salvador	2.398	38,2	1.341	21,3	1.085	17,2	496	7,8
Guatemala	4.387	25,6	3.292	19	3.520	20	N/A	N/A
Honduras	4.078	40,9	3.613	35,7	3.931	38,2	3.661	35,1
Nicaragua	515	7,7	N/A	N/A	754	11	N/A	N/A
Panamá	480	11,3	500	11,6	550	12,6	499	11,3
Belice	134	34,4	102	25,8	125	31,3	113	27,9

Fuente: UNODC (2023, p.110)

3.1.3. Delitos violentos más allá de los homicidios

Además de las preocupantes tasas de homicidios, Centroamérica registra también una gran incidencia de delitos no letales, destacando las extorsiones, robos con violencia, agresiones sexuales o incluso secuestros. Estos delitos también generan grandes impactos sociales y económicos.

El Triángulo Norte se dice que es el epicentro mundial de la extorsión debido a las pandillas, datos del año 2015 sugieren que los salvadoreños pagan 400 millones de dólares americanos a las pandillas por extorsiones, seguidos por los hondureños, que pagan 200 millones y los guatemaltecos, pagando 61 millones, aunque cabe destacar que en la realidad las cifras serán mayores ya que la extorsión es uno de los crímenes que menos se reporta (Dudley & Lohmuller, 2015).

En Costa Rica y Panamá, se ha experimentado un aumento, desde 2018 de robos con violencia y delitos sexuales, que podría estar relacionado al avance del crimen organizado. Asimismo, en Nicaragua, los datos oficiales son limitados debido a la falta de transparencia institucional (UNODC, 2007).

Además, cabe resaltar que los delitos violentos están sub reportados, y se estima que no se denuncia siquiera el 50% de los hechos criminales que se producen, lo que quiere decir que, en el mejor de los casos, se estarían denunciando la mitad de los ocurridos, por lo que la violencia real es mayor de la que reflejan las estadísticas. El motivo de que no se denuncien, se debe al alto nivel de desconfianza hacia el estado y sus instituciones (Lagos & Dammert, 2012, p.59).

3.2. Presencia de crimen organizado, maras y narcotráfico, y su impacto

La violencia es el principal problema de Centroamérica, la presencia de crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y las maras hacen que la región sea insegura y el desarrollo social se vea afectado. Esta problemática afecta tanto a la comunidad local como a las instituciones del estado.

3.2.1. El fenómeno de las maras

Las pandillas juveniles aparecieron dentro de la comunidad migrante centroamericana en Los Ángeles, las más conocidas eran la mara Salvatrucha o MS-13, y Barrio 18 o 18. En los años 90, regresaron a sus países de origen, normalmente a causa de deportaciones por haber cometido delitos en EE. UU. Al regresar a sus países, en un contexto marcado por violencia juvenil como consecuencia de años de guerra civil y del intento de construir instituciones democráticas sin apenas recursos, los pandilleros enseñaban a las pandillas locales la cultura que tenían en Los Ángeles (Falkenburger & Thale, 2008).

La violencia juvenil se vincula con la exposición temprana a violencia en el hogar, ya que los niños que experimentan violencia luego son más propensos a reproducirla. Por ejemplo, en 2001, la violencia física hacia los hijos se daba en el 60% de los hogares de El Salvador (Santacruz Giralt & Concha-Eastman, 2001, p. 69). Asimismo, en 2002, en Honduras, el 38% de los pandilleros declararon haber sufrido violencia física de forma regular durante su niñez (Falkenburger & Thale, 2008). Aunque cabe destacar que esta no es la única razón para unirse a las pandillas.

El número de pandilleros que existe varía significativamente, hablando de 70.000 por la baja y 300.000 por lo alto. Las pandillas operan normalmente en los barrios más pobres y marginales de las ciudades, y sus fuentes de ingresos provienen de extorsiones, robos, secuestros y asesinatos.

La presencia de pandillas en el Triángulo Norte -El Salvador, Honduras y Guatemala- constituye una grave amenaza para la seguridad pública. Con los años las pandillas se han vuelto más violentas, al inicio sólo eran agrupaciones juveniles con un sentimiento de pertenencia e identidad, sin embargo, con la falta de oportunidades socioeconómicas se transformaron en las estructuras criminales que conocemos hoy en día. Las más conocidas en estos países son la MS-13 y la 18, aunque existen más bandas, pero de menor tamaño.

En el resto de los países de Centroamérica, la situación de las pandillas varía. La principal causa de la violencia en Belice son las pandillas locales, así como personas que pertenecen a las maras del Triángulo Norte también (InSight Crime, 2017). En Costa Rica, los datos de hasta 2016 nos indican que las maras no tenían presencia en su territorio, pero sí existen grupos criminales locales y transnacionales (InSight Crime, 2018). Estas maras no son un problema en Nicaragua, no hay evidencia de que existan, sino que la violencia allí se debe por bandas juveniles sin relación a maras como la MS-13 o la 18. Por último, en Panamá los grupos criminales están formados por pandillas locales, siendo las más grandes *Bagdad* y *Calor Calor*, quienes están enfrentadas, y debido a su violencia, la tasa de homicidios en el país ha aumentado en los años más recientes (InSight Crime, 2021).

3.2.2. El narcotráfico y su influencia

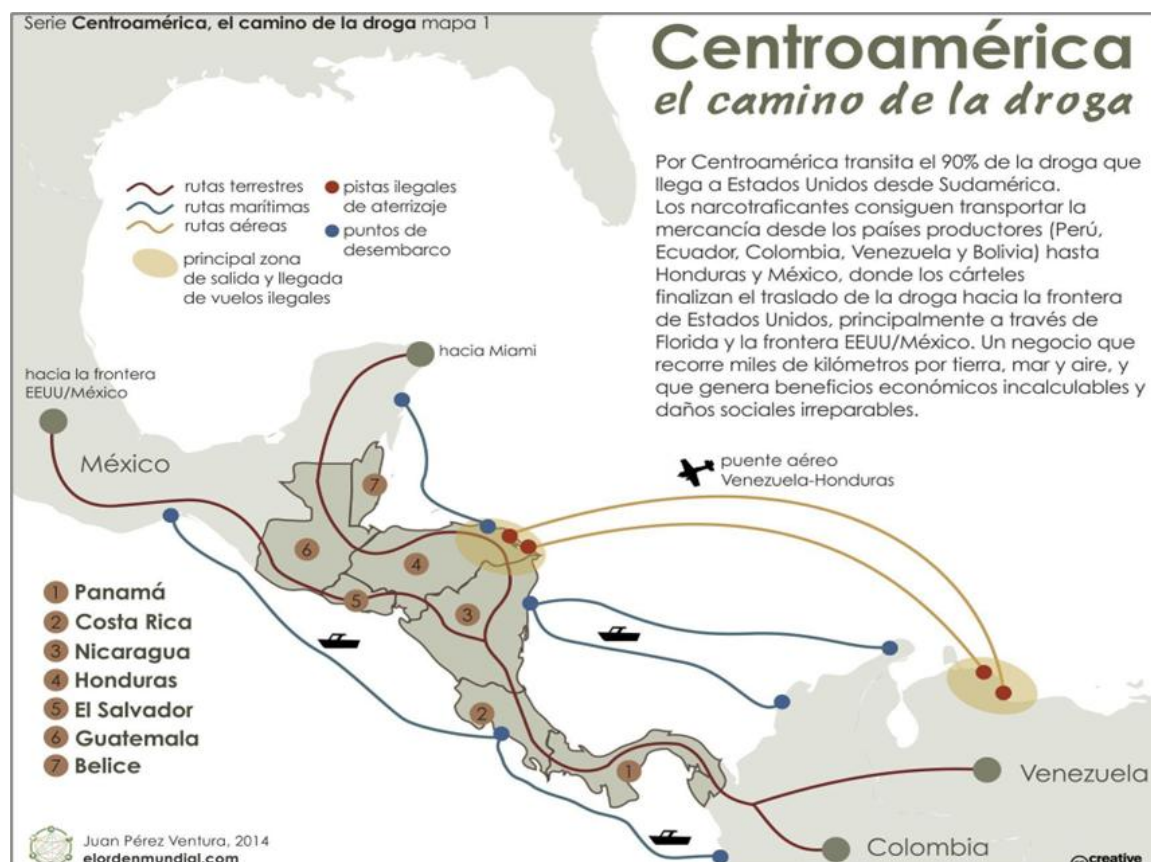
Los mercados ilegales, como el del narcotráfico, generan focos estructurales de violencia, ya que las partes no pueden dirimir litigios a través del derecho a la propiedad y los tribunales de justicia (Duque & Chaves Cambronero, 2023).

El narcotráfico es un problema estructural arraigado en las instituciones, como demuestra el caso de Costa Rica, donde hay expresidentes relacionados con el narcotráfico (Duque & Chaves Cambronero, 2023).

Centroamérica posee una ubicación única y estratégica, convirtiéndola en el paso del 90% de la droga, en especial de la cocaína, que va desde América del Sur a Estados Unidos. Los cárteles y las

maras se ocupan de administrar este negocio. Los desplazamientos de droga se llevan a cabo por tierra, mar y aire (ver Figura 2), y se estima que casi 1 millón de kilos de cocaína pasa por Centroamérica cada año (El Orden Mundial, 2014).

Figura 2: Mapa del camino de la droga por tierra, mar y aire



Fuente: *El Orden Mundial* (2014)

El narcotráfico intensifica los niveles de violencia en la región, bien sea por el control territorial, el reclutamiento forzoso o la extorsión. Las pandillas o maras centroamericanas se involucran en partes de la cadena de suministro, actuando como intermediarios, transportistas o protectores de los cargamentos. Asimismo, los grandes traficantes pueden proporcionar armas o capital a las pandillas, fomentando enfrentamientos entre ellas (International Crisis Group, 2025).

3.2.3. Impacto del crimen organizado en las instituciones y la seguridad

Debido al crimen organizado y la corrupción que se vive en estos países, el estado ha perdido el monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza, y esto ha llevado a que los ciudadanos no confíen en sus instituciones públicas ni se sientan seguros, por ello el contrato social se ha desmoronado y las personas toman la ley por su propia mano. Los países necesitarían de desarrollo, justicia, buen gobierno y seguridad para poder romper el círculo vicioso con la violencia (UNODC, 2007, p.9).

La corrupción se da en todos los niveles de los gobiernos, desde pagos a funcionarios de bajo nivel para alguna alteración en el cumplimiento de sus funciones, hasta funcionarios de alto nivel con fraude o malversación de fondos públicos. Y no solo eso, también hay corrupción en la policía o el sistema judicial. En una encuesta realizada por Latinobarómetro, la proporción de servidores públicos percibidos como corruptos es altísima, alcanzando datos de 77% en Nicaragua, 76% en Guatemala o 67% en Honduras (UNODC, 2007, p.77).

Hay un sentimiento generalizado en toda Centroamérica de una falta de cumplimiento de la ley. Asimismo, los niveles de los servicios son bajos y los de corrupción, como acabamos de indicar, muy altos, lo que lleva a que los ciudadanos evadan impuestos, contribuyendo a la economía informal (UNODC, 2007, p.93).

La confianza en las fuerzas del orden de estos países es muy baja. Sólo el 15% de los ciudadanos guatemaltecos tienen confianza en la policía, seguidos del 20% de los hondureños o el 32% de los costarricenses, aunque ninguno de los países tiene datos esperanzadores ya que, el dato más alto es Panamá con un 45%. Esta desconfianza se ve reforzada por los niveles de denuncia, que son aún más bajos, donde en la región solo un 16% de las víctimas denuncia, esto aumenta la impunidad y hace que el círculo vicioso de inseguridad siga (Lagos & Dammert, 2012, p.56).

3.3. Relación entre violencia, migración y remesas

3.3.1. Violencia y migración forzada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2017, p.21) indica en su informe *Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica* que la principal causa del desplazamiento interno en el Triángulo Norte es la violencia de pandillas, maras y carteles del narcotráfico, aunque se debe señalar que también es causado en algunas ocasiones por el accionar de agentes estatales. Esta situación, aunque en menor escala, puede extrapolarse al resto de países de Centroamérica, donde los niveles de violencia son comparativamente inferiores. Asimismo, las personas desplazadas están expuestas a situaciones de alta peligrosidad, como abusos, trata de personas, o violencia física y sexual.

El *Global Report on Internal Displacement 2024*, señala como obtener datos de países afectados por crimen organizado y otras formas de violencia es muy difícil. Sólo existen datos de desplazamientos internos de El Salvador, que reportaron 66.000 movimientos internos causados por conflictos y violencia en 2023. Aunque los datos sean necesarios para poder crear políticas públicas adecuadas y respuestas operacionales, países como Honduras y Guatemala sólo revelan las cifras de los beneficiarios de ayuda humanitaria en los desplazamientos internos, un número que está muy debajo de la cifra real (Internal Displacement Monitoring Centre, 2024, p.90).

Este fenómeno no solo ocurre dentro de las fronteras de un país, sino que tiene una dimensión transfronteriza. En todo el mundo, hay más de medio millón de refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y, en total, casi 1 millón de personas del Triángulo Norte y Nicaragua han buscado refugio en otro país de Centroamérica distinto al que residen (PNUD & Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2021). Con la frase de ACNUR (2023), “En Centroamérica, miles de personas deben decidir entre abandonar su país o correr el riesgo de morir”, observamos el carácter forzoso de estas migraciones. Asimismo, 4 de los 10 países que más solicitudes de asilo generaron durante 2019 fueron de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. (Pradilla, 2020). Un dato preocupante es el de Nicaragua, pues el 10% de sus ciudadanos han huido en un lapso de 4 años, impulsados por la crisis socioeconómica que aún se vive en el país, y el miedo a quedarse (Orozco, 2023). La pérdida de capital humano que se produce es alarmante, ya que se reduce la fuerza laboral nacional, debilitando las posibilidades de crecimiento económico interno y profundizando la dependencia del exterior.

3.3.2. Las remesas como resultado económico del desplazamiento

La migración forzada de personas procedentes de Centroamérica ha generado el incremento de las remesas. Cuatro países de Centroamérica: Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala percibieron en 2022 más del 20% de su PIB de remesas. En Honduras representaron el 28,8% del PIB y en El Salvador un 26,7%. Estos datos son alarmantes ya que en un país si la actividad económica de un rubro en particular, como en este caso son las remesas, representa más del 5% de su ingreso nacional, se crea una relación de dependencia, y por lo tanto vulnerabilidad (Arévalo, 2023). En 2020 las remesas a

Centroamérica fueron más de 30 mil millones de dólares (Banco Centroamericano de Integración Económica [BCIE], 2021). Un 30% de hogares tienen al menos un familiar en el exterior. Asimismo, el 73,5% de las remesas que reciben, proviene de Estados Unidos, siendo el principal origen de todos los países (Maldonado & Harris, 2023)

El BCIE (2021), subraya que las remesas aparte de constituir una fuente de ingreso fundamental para los ciudadanos de estos países, superan la IED y la ayuda oficial al desarrollo.

La situación de las remesas es contradictoria, pues, aunque contribuyen al consumo y alivian la pobreza en el corto plazo, reflejan la precariedad interna que obliga a la población a migrar. Además, al aliviar la pobreza solo en el corto plazo, no se corrigen las causas estructurales que la originan, como la violencia, la falta de empleo formal o la debilidad de las instituciones (Mora-Rivera & Morales Gutiérrez, 2018).

4. Impacto económico de la violencia

4.1. Sectores económicos afectados por la violencia

La violencia en Centroamérica impacta en numerosos sectores económicos clave. Entre los más vulnerables se encuentran el comercio, la agricultura, y el turismo, que enfrentan importantes retos debido a la violencia y la inseguridad que hay en la región.

En el sector del comercio y el transporte, la violencia incrementa los costos operativos para las empresas, especialmente en aquellas áreas controladas por el crimen organizado y las pandillas o maras. En el Salvador, el 29,4% de las PYMES, el 31,8% de las medianas y grandes empresas y el 32% de los negocios informales señalan a la inseguridad y la delincuencia como principales obstáculos de sus operaciones (OIT, 2019)

Uno de los principales problemas es la extorsión, que incluso se normaliza en las dinámicas empresariales. En Guatemala, las empresas pagaron más de 10 millones de dólares en extorsiones durante 2018, excluyendo los altos costos de seguridad y seguros (Vázquez del Mercado et al., 2021, p.6). Asimismo, los costos de la extorsión se trasladan a los consumidores, subiendo el precio de los bienes y servicios. Los costos de transporte y logística también aumentan por el riesgo de robos y bloqueos en las rutas comerciales.

Además, sumado a la ilegalidad y el secretismo con el que se efectúan los pagos de las extorsiones, existe una falta de confianza institucional, lo que hace que las empresas no denuncien y opten por medidas de autoprotección que incrementan sus costos (Vázquez del Mercado et al., 2021).

La actividad agrícola ha sido especialmente vulnerable también. En zonas rurales de los países del Triángulo Norte, la presencia de pandillas y el aumento de las amenazas ha forzado el abandono de tierras y ha interrumpido las cadenas de valor agrícola, dificultando la producción y comercialización de productos (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2020; ACNUR, 2023).

Otro de los sectores más afectados por la violencia es el turismo. Existe una correlación negativa entre las tasas de homicidios y la llegada de turistas, y es que se ha observado que la disminución del turismo internacional en Centroamérica es consecuencia de su aumento de violencia (Pérez-Vincent et al., 2024, p. 91). La percepción de inseguridad lleva a los turistas a no ir a estos países, perjudicando las economías locales y al desarrollo sostenible del país. Asimismo, el turismo influye en los demás servicios, como comercio, finanzas, transporte, telecomunicaciones, etc. (Rivera et al., 2024).

Para mitigar los efectos de la violencia en estos sectores económicos, los países centroamericanos implementan políticas públicas para mejorar la seguridad. En América Latina, las políticas públicas están sujetas a “rigideces inter-temporales”, lo que quiere decir que cambian más lentamente que las necesidades de los ciudadanos (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2022, p.144). Además, existe un obstáculo para la elaboración de políticas basadas en datos reales, y es la falta de estadísticas confiables (Banco Mundial, 2011, p. iii). Aun así, hay países que han conseguido aplicar políticas que han resultado eficaces.

En El Salvador, el Plan Control Territorial (PCT), que será analizado en la sección 5, fue implantado en 2019 y tenía objetivos de reducir los índices de violencia, desarticular estructuras criminales, recuperar territorios que estaban bajo control de las pandillas, implementar programas de prevención y reintegración, y fortalecer las fuerzas de seguridad; al analizar sus resultados, vemos que ha habido una reducción significativa de la violencia y el crimen, lo que ha llevado al fortalecimiento de la economía ya que las empresas encuentran un entorno más seguro en el que operar (López Fuentes, 2024, p.23).

En Guatemala la Estrategia Nacional de la Prevención de la Violencia y el Delito, de 2017, busca mitigar la violencia mediante políticas de seguridad y desarrollo social, y respecto a sus resultados, vemos que, aunque algunas áreas sí reportaron disminuciones en delitos violentos, los avances no han sido uniformes.

En Honduras, la Política integral de convivencia y seguridad ciudadana para Honduras 2011-2022, se centraba en la prevención del delito y la mejora de la seguridad pública, y en los resultados vemos como en las áreas donde las estrategias se implementaron más, se observó una mejora en la cohesión social y reducción de robos y vandalismo, pero los resultados no han sido uniformes y persisten desafíos aún en estas zonas (López Fuentes, 2024, p.26).

En conclusión, la falta de estadísticas confiables y la persistencia de retos estructurales limitan la efectividad de políticas en Centroamérica.

4.2. Impacto en la Inversión Extranjera Directa (IED)

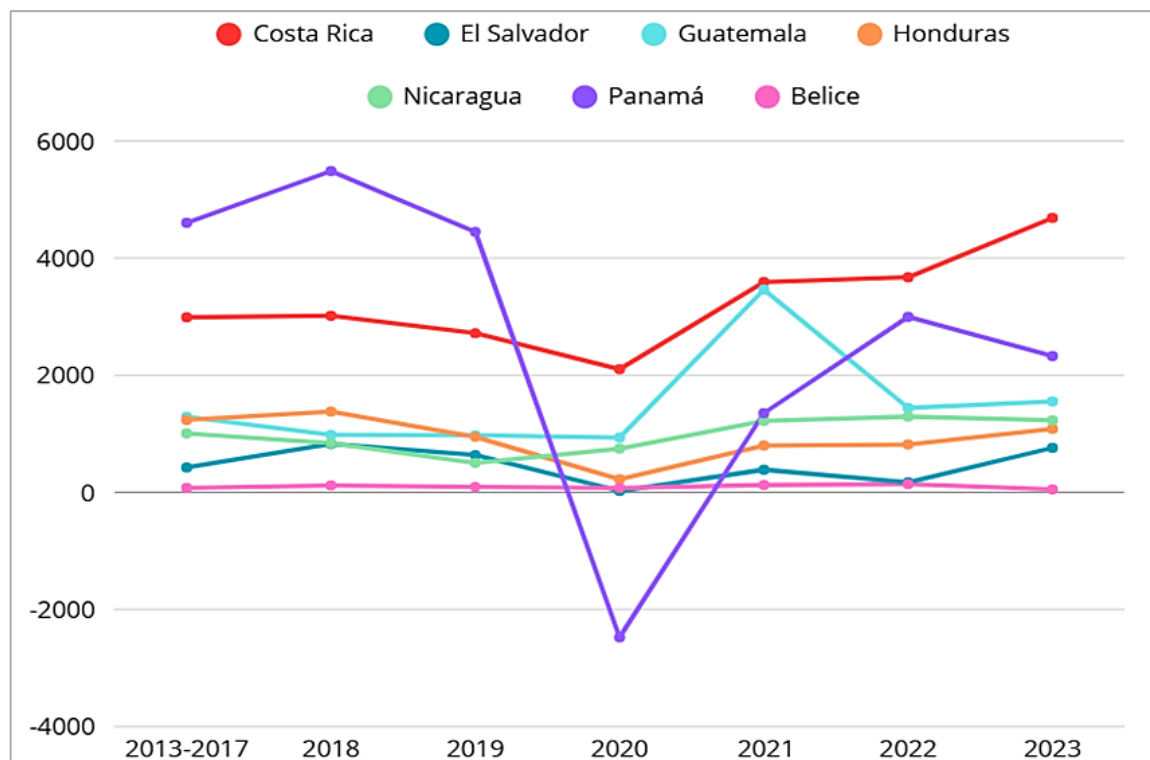
La inversión extranjera directa (IED) -entrada neta de capital en porcentaje del PIB- se considera un componente clave para el desarrollo económico de un país o de una región, ya que entra un capital externo capaz de fomentar empleo, innovación e infraestructura productiva. Sin embargo, la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad de los estados pueden hacer que no haya interés en invertir debido a los riesgos y a la incertidumbre a la que se enfrentan. Llama la atención que un reciente estudio, centrado en el caso de México, indica que cada tipo de crimen ejerce un impacto diferente sobre las decisiones de inversión, “elemento que debe ser considerado en el diseño de las estrategias de seguridad del país” (Cabral & Saucedo, 2018). Los investigadores concluyen que tanto los homicidios como los robos tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre los flujos de IED, mientras que los delitos contra la propiedad y otros tipos de crimen como secuestros, extorsiones o fraudes no presentan un impacto observable en dichos flujos. En concreto, un incremento de 1% de la cantidad de robos provoca una caída de la IED de 0,33% año y medio después. En la misma línea, el BID (2024) subraya como “una de cada cuatro empresas identifica el crimen como una restricción seria o muy seria para hacer negocios”.

En este sentido, indicadores como IED ayudan a observar el nivel de confianza que tienen los inversores extranjeros en países centroamericanos (ver Gráfica 2). Según el Banco Mundial (2023a), Nicaragua han logrado mantener una IED estable, superando el 6% en los últimos 10 años, con Costa Rica alcanzando niveles similares. Por otro lado, países con índices de violencia más altos como Honduras, El Salvador, Guatemala o Belice, este indicador se mantiene muy bajo, respectivamente es del 3,2, 1,9, 1,5 y 0,5 en cada caso.

Datos de CEPAL (2023) reafirman esta tendencia. En 2023, Centroamérica recibió en total 11.642 millones de dólares en IED, representando el 6,3% del total regional (formado por América del

Sur, México, Centroamérica y El Caribe). Dentro de Centroamérica, Costa Rica posee el dato más elevado con 4687 millones de dólares, mientras que Belice el más bajo, con solo 50 millones, seguido de El Salvador, con 760 millones (CEPAL, 2024a, p.28).

Gráfico 2: Evolución entradas de inversión extranjera directa, por países receptores de Centroamérica, 2013-2023 (en millones de dólares)



Fuente: *Prado Pérez (2018)*

El impulso de políticas que fortalezcan la confianza, mejoren infraestructuras y promuevan la seguridad son clave para sostener y aumentar los flujos de IED. Saavedra y Flores (2017) al analizar los determinantes de la IED en América Latina destacan el papel crucial del gobierno como factor de atracción. El estudio subraya que la solidez institucional y la garantía de derechos de propiedad son fundamentales para atraer y retener flujos de capital foráneo.²

Un claro ejemplo de éxito es Costa Rica, principal receptor de IED en Centroamérica gracias a la estabilidad política, disponer de mano de obra cualificada, y una política de mayor apertura comercial. Los sectores que destacan son los de alta tecnología o la manufactura de mayor valor añadido como dispositivos médicos y semiconductores.

Esto ayuda a respaldar la idea de que un entorno más seguro incentiva a invertir capital extranjero.

4.3. Costes económicos directos de la violencia en el PIB

Ya hemos analizado como la violencia en Centroamérica tiene un impacto económico directo y considerable, tanto por sus efectos sobre la inversión como por el gasto público en seguridad que deben hacer los estados. Por ello, en lugar de destinar sus recursos a sectores con necesidades básicas como

² Los sectores en los que se tiende a invertir en la región Centroamericana son la minería, el sector financiero, tecnología o servicios.

el de la salud o la educación, muchos estados tienen que priorizar gastos en seguridad y justicia para tratar de hacer frente a esa violencia y esa inseguridad que caracteriza la región.

De acuerdo con el BID, el costo directo del crimen y la violencia representa el 3,44% del PIB en América Latina y el Caribe en 2022, siendo este dato del 3,46% en Centroamérica (Pérez-Vincent et al., 2024, p. 13). Esto traducido en cifras es algo preocupante, ya que es una región cuyo PIB anual son billones de dólares, por lo que miles de millones se perderían por este costo. Este dato desglosado corresponde a 0,77% del coste directo del capital humano -incluye pérdidas por homicidios, delitos no letales reportados y personas privadas de libertad-, 1,03% del coste directo del sector público -incluye costos en servicios policiales, administración de justicia y administración penitenciaria- y 1,65% del coste directo para el sector privado. Debemos asimismo señalar que los datos varían significativamente según el país.

La siguiente tabla (ver Tabla 3) muestra la evolución del costo económico directo del crimen y la violencia en los países centroamericanos entre 2014 y 2022, desglosado por sector público, privado y capital humano. Aunque en todos los países se observa una reducción respecto a 2014, los niveles siguen siendo elevados. Honduras continúa liderando con un 4,6% del PIB en 2022, seguido de El Salvador, 3,92% y Nicaragua, 3,54%. Incluso países considerados más estables como Costa Rica o Panamá siguen superando el 3%.

Tabla 3: Costos directos de la violencia y el crimen por país en Centroamérica, 2014 y 2022 (% del PIB)

	2014				2022			
	Costo Público	Costo Privado	Costo en Capital Humano	Costo Total	Costo Público	Costo Privado	Costo en Capital Humano	Costo Total
Costa Rica	1,25	1,24	0,62	3,1	1,06	1,37	0,59	3,03
El Salvador	1,39	2,99	1,98	6,37	1,52	1,58	0,82	3,92
Guatemala	0,66	1,67	1	3,33	0,69	1,74	0,62	3,04
Honduras	1,04	4,56	1,82	7,42	1,16	2,37	1,07	4,6
Nicaragua	1,03	2,32	0,38	3,73	1,05	1,91	0,58	3,54
Panamá	0,92	1,8	0,84	3,55	0,86	1,43	0,84	3,13
Belice	0,97	0,94	1,27	3,18	1,14	1,02	0,89	3,05

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Pérez-Vincent et al. (2024)

Centrándonos en el gasto público, el 1,03% del PIB destinado a seguridad representa un mayor porcentaje que el que muchos de los países dedican a sectores básicos. Por ejemplo, el gasto en salud pública en 2023 en Centroamérica fue del 3,8% del PIB, una cifra muy por debajo del mínimo de 6% que recomienda la OMS (Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos [Fedefarma], 2023). Incluso Costa Rica es el único país de la región donde el 100% de la población tiene acceso a electricidad y agua potable (Bala, 2022). Esta desviación de recursos debido a la violencia es alarmante, los estados se ven obligados a invertir en mitigar los efectos de la inseguridad, en vez de mejorar servicios básicos o fomentar el desarrollo. Esto genera un círculo vicioso, que hace que la falta de inversión en desarrollo humano perpetúe condiciones que alimentan la violencia.

Asimismo, la violencia también genera una gran cantidad de costes indirectos, que afectan a diversos sectores y aspectos de la sociedad. De muchos ellos ya hemos hablado, como la reducción de

las oportunidades de empleo, la disminución de la inversión extranjera directa, el aumento de la emigración, la erosión institucional, la corrupción y el impacto negativo en el turismo (Plotnikov, 2020). Estos costes representan una carga adicional significativa para las economías centroamericanas.

4.4. Violencia, pobreza y desigualdad: un círculo vicioso

La violencia en Centroamérica se vincula estrechamente con la pobreza y la desigualdad, y generan un círculo vicioso que termina limitando el desarrollo económico y reforzando la exclusión social. En los contextos donde existe una violencia persistente, las poblaciones más afectadas suelen ser las más vulnerables, lo que reduce su capacidad de acceso a servicios básicos, impidiendo la acumulación de capital y obstaculizando la movilidad social.

La desigualdad puede observarse mediante el [coeficiente de Gini](#), que mide la desigualdad de ingresos. En 2020, el índice medio global se encontraba en 0,67 (Chancel et al., 2022, p.55). En Centroamérica, los datos muestran una alta desigualdad, los últimos datos que tienen por cada país son los siguientes: en 2023 Panamá tenía 48,9 y Costa Rica 46,7, en 2022 El Salvador 38,8, en 2019 Honduras 48,2, en 2014 Guatemala 48,3 y Nicaragua 46,2 y en 1999 Belice 53,2 (Banco Mundial, 2023b).

La situación de pobreza marca a muchos de los ciudadanos centroamericanos. En Honduras y Guatemala los índices se disparan, pues más de la mitad de la población vive en situación de pobreza, en 2023 era porcentaje era el 56% en ambos países (Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, 2024; CEPAL, 2024b). En el resto de los países (2023), aunque las cifras son algo menores, siguen siendo elevadas: Belice con 37.5%, El Salvador con 27,9%, Costa Rica 15,9%, Panamá 14,3% y de Nicaragua se desconocen datos desde 2014, cuando su valor fue de 46,3% (CEPAL, 2024b). Estos datos son alarmantes, ya que como expuso Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, “donde hay una gran cantidad de gente mayor, de gente joven, en plena flor de vida, niñez, prácticamente en situaciones de indigencia, pidiendo. Y esa desigualdad y pobreza lanzan cantidades de jóvenes a la economía de la violencia” (Forbes Centroamérica, 2022).

Al observar los datos relacionados con pobreza y desigualdad, observamos que se corresponden con los de tasas de homicidios, siendo los países del Triángulo Norte los peor parados, en especial Honduras y Guatemala, ya que El Salvador gracias a sus políticas de seguridad ha logrado mejorar su situación, aunque sus cifras siguen siendo elevadas a nivel internacional.

La literatura económica recoge esta relación y el círculo vicioso que se forma. Fajnzlyber et al (2002), en su trabajo *Inequality and Violent Crime*, concluyeron que existe una correlación entre la desigualdad de ingresos y los niveles de crimen violento, en particular los homicidios. Un aumento en la desigualdad de ingresos está vinculado a un aumento en las tasas de criminalidad, independientemente de otros factores estructurales como el ingreso per cápita.

En definitiva, los altos niveles de pobreza y desigualdad alimentan las dinámicas de violencia que afectan en todos los ámbitos, incluidos el económico. Asimismo, la inseguridad desincentiva la inversión, deteriora el capital humano y obliga a emigrar, actuando como freno al crecimiento económico. A su vez, la falta de oportunidades refuerza las condiciones que alimentan la violencia. Todo acaba siendo un círculo vicioso del que es muy complicado salir.

5. Un caso de cambio en la seguridad y violencia: El Salvador

5.1. Situación previa

Antes de que el presidente Nayib Bukele implantase el Plan Control Territorial (PCT), indicado en la sección 4.1., -sectores económicos afectados por la violencia-, El Salvador enfrentaba una de las crisis de seguridad más graves del mundo. Entre los años 2010 y 2019 la tasa de homicidios superaba los 40 por cada 100.000 habitantes, llegando a alcanzar 107/100.000 en el 2015 (Banco Mundial, s.f.), cifras realmente alarmantes tal y como hemos visto en la sección 3.1. Esta situación de violencia se debe en parte a las pandillas o maras, en especial la MS-13 y el Barrio 18, las cuales ejercían un control territorial significativo.

Además de los homicidios, y a causa de la violencia estructural, el país enfrentaba desplazamientos forzados, tanto internos como externos, extorsiones, reclutamiento forzado de jóvenes y niños, y una fuerte desconfianza institucional, tal y como ya hemos explicado a lo largo del trabajo.

En gobiernos anteriores, se trataron de establecer políticas de seguridad para acabar con las pandillas y reducir la violencia. Un ejemplo es el Plan Mano Dura en 2003, bajo el gobierno de Francisco Flores, o el que le siguió entre los años 2004 y 2006, denominado Plan Super Mano Dura bajo la administración de Antonio Saca. Ambos se basaron en represión policial, sin acompañamientos institucionales en el ámbito judicial ni social. Se llevaron a cabo miles de detenciones de presuntos pandilleros, pero la mayoría de ellos eran liberados a las pocas horas por falta de pruebas. Estas estrategias tomadas por ambos gobiernos no lograron reducir la violencia ni la criminalidad, sino que hicieron que creciese la desconfianza en el sistema de justicia y en las instituciones del estado (Aguilar, 2019).

Debido a este escenario de inseguridad crónica, violencia estructural y falta de confianza institucional, la llegada al poder de un gobierno como el de Bukele, con un enfoque más centralizado y agresivo, se vio facilitada.

5.2. Medidas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele

El Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha optado por políticas de mano dura contra la violencia que se produce en su país, por ello, en junio de 2019 anunció el PCT. Este es un programa de seguridad que busca reducir las tasas de homicidios y criminalidad causada por la violencia y la presencia de maras, devolviendo la paz a las calles (Zimmermann, 2021). El plan está compuesto por 7 fases, de las cuales 6 ya han sido implementadas y la última aún no ha sido revelada, pues sólo se implementaría si las fases 1-6 no tienen éxito. La siguiente tabla (ver Tabla 4) analiza cada una de las fases, indicando su nombre, la fecha en la que fue anunciada y una breve descripción.

Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra en un estado de excepción, que ya ha sido prolongado 38 veces consecutivas, con vigencia de 30 días cada vez. Este es un mecanismo usado para abordar situaciones de emergencia, en el que se pueden suspender ciertos derechos constitucionales, fue decretado tras una ola de homicidios atribuidos a pandillas (Alvarado et al., 2022, p.35). Entre los derechos suspendidos se encuentran la libertad de asociación y reunión, la privacidad de las comunicaciones, las garantías del debido proceso y derechos penitenciarios, entre otros.

Por otro lado, el gobierno implementó una serie de reformas en el Código Penal y promulgó diversas Leyes, incluyendo el aumento de penas, la prisión para menores que superen los 12 años, la supresión de medidas alternativas a las detenciones, etc. (Alvarado et al., 2022, p.36). Bajo este régimen, la PNC y la Fuerza Armada tienen facultades ampliadas para detener personas sin orden judicial, y pueden mantenerlas bajo custodia hasta 15 días sin presentar cargos formales. Desde el inicio del régimen y

hasta finales de 2024, las cifras de detenciones alcanzan las más de 83.000 personas (Amnistía Internacional, 2024).

Tabla 4: Fases del Plan de Control Territorial de El Salvador.

Fase	Nombre	Fecha anunciada	Descripción
1	Preparación	20 junio 2019	Despliegue masivo de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y militares en las calles, para poder atacar a las pandillas y recuperar el control. Asimismo, reforzaron el control sobre las cárceles, quitando los beneficios a los pandilleros reclutas y endureciendo condiciones para debilitar su capacidad de coordinación desde dentro.
2	Oportunidades	2 julio 2019	Acciones dirigidas a la prevención de la delincuencia. Construcción de estructuras de skateboard y Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBOS), para prevenir que niños y jóvenes ingresen en maras y pandillas.
3	Modernización	30 julio 2019	Dotar de mejores equipos a la policía nacional y fuerza armada, para que puedan así enfrentarse al crimen organizado y las maras.
4	Incursión	19 julio 2021	Incrementar la capacidad de la Fuerza Armada de 20.000 a 40.000 elementos en 5 años, para incursionar los territorios dominados por las pandillas y poder recuperarlos.
5	Extracción	24 noviembre 2022	Extracción física de criminales que aún siguen en las comunidades, interceptando a delincuentes y a sus colaboradores.
6	Integración	15 septiembre 2023	Creación de la Dirección Nacional de Integración, con el propósito de coordinar diversos actores para trabajar en temas de seguridad, atendiendo necesidades a mediano y largo plazo.

Fuente: *Elaboración propia a partir de Salazar Alvarado (2023); Colacho & Olivares (2024).*

Para albergar a todos los criminales detenidos, el gobierno ordenó construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega cárcel inaugurada en enero de 2023. Fue construida en sólo 7 meses y está diseñada para albergar hasta 40,000 reclusos de alta peligrosidad. Cuenta con 256 celdas de máxima seguridad, sin ventanas ni ventilación, equipadas con camas de metal, sin acceso a objetos personales ni privacidad alguna. Reciben alimentación básica -arroz, frijoles y huevo- para comer con las manos. Abandonan la celda 30 minutos al día, para salir al pasillo a hacer ejercicio con su propio peso (BBC News Mundo, 2025).

En conjunto, estas acciones reflejan una transformación en el enfoque de seguridad de El Salvador, usando la centralización del poder y la adopción de políticas punitivas como un nuevo modelo de gobierno.

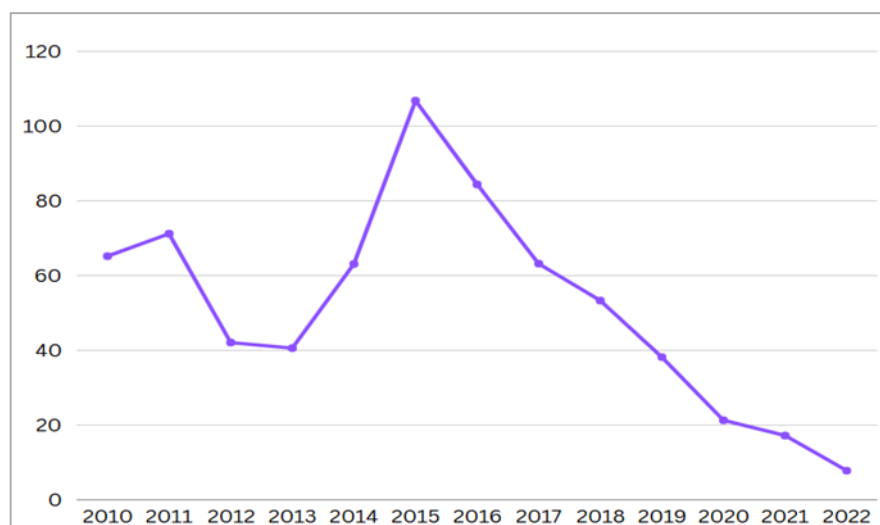
5.3. Indicadores de mejora en seguridad

Uno de los principales éxitos del PTC en el marco del estado de excepción ha sido el descenso significativo de la tasa de homicidios. Antes de su implementar, las cifras eran preocupantes, pues en años como 2016, 2017, 2018, llegaron a alcanzar tasas de 84,41, 63,22 y 53,31 respectivamente.

En el gráfico de la siguiente página (Gráfico 3) podemos ver mejor visualmente esa disminución mencionada. En el año 2022, la cifra registrada de esta tasa descendió hasta 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo el dato más bajo desde que se tiene registro. Incluso a lo largo de 2023 y 2024 han alcanzado a registrar meses con 23 o 24 días seguidos sin homicidios, dejando muy en el

pasado cifras aterradoras como los 18,2 homicidios diarios que se producían en 2015 (Asamblea Legislativa de El Salvador, 2024).

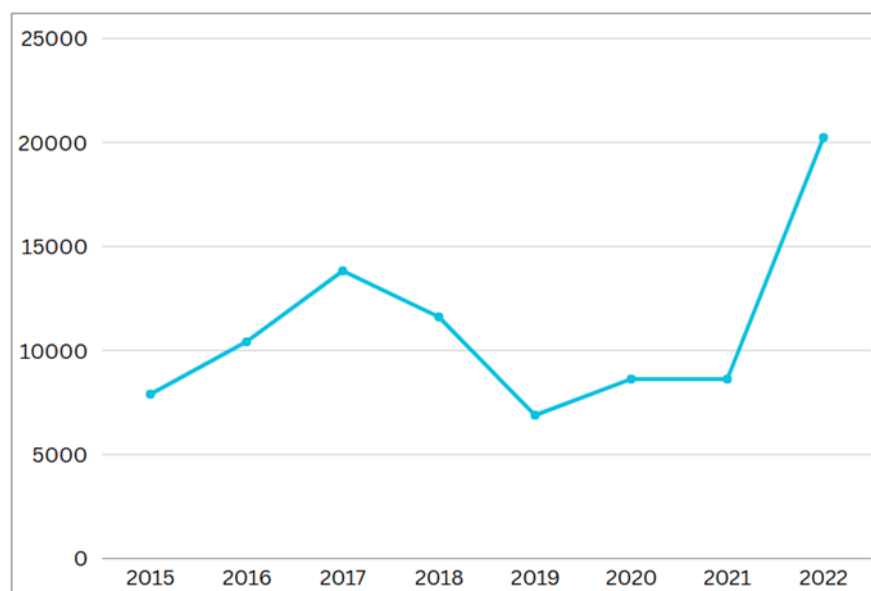
Gráfico 3: Evolución de la tasa de homicidios en El Salvador, 2015-2022 (tasa por 100.000 habitantes)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Banco Mundial (s.f.).

Asimismo, el número de militares asignados a tareas de seguridad pública también aumentó, en especial entre el año 2021 y 2022, correspondiente a la Fase 4 del PCT, enfocada en el incremento de la capacidad de las Fuerzas Armadas. En el gráfico 4 podemos observar dicho aumento (Colocho & Olivares, 2024, p.14)

Gráfico 4: Evolución del número de efectivos militares en tareas de seguridad en El Salvador, 2015-2022



Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de Colocho & Olivares (2024)*

Además, se han capturado a una gran parte de los componentes de las principales pandillas del país, a finales del 2023, el 67,1% de los miembros de la MS-13 y el 65,1% de la facción Sureños y 54,3% de la facción Revolucionarios de Barrio 18 habían sido detenidos (Saiz, 2024).

En cuanto a la percepción ciudadana de la seguridad, El Salvador ha experimentado una clara transformación. Según encuestas recientes, en 2024 el 88% de los ciudadanos señalaron sentirse seguros caminando solos de noche (Saiz, 2024).

De igual forma, los turistas internacionales también consideran El Salvador como un destino seguro, lo que se tradujo en 2024 en un aumento de un 81% de llegada de turistas internacionales, posicionándose en el top 2 de destinos con mayor crecimiento global (Ministerio de Turismo de El Salvador, 2025). Con proyectos de desarrollo turístico e infraestructura como *Surf City*, el cual tiene como objetivo convertir el país en destino internacional del surf, se ha logrado atraer inversores y turistas (Ministerio de Turismo de El Salvador, s.f.).

Estos indicadores, nos sugieren que, al menos en el corto plazo, el PCT ha conseguido generar un impacto positivo en la seguridad del país.

5.4. Críticas, restricciones y opacidad institucional

A pesar de los resultados positivos que se han obtenido en materia de reducción de violencia, el PTC, en el contexto del régimen de estado de excepción, ha estado acompañado de numerosas críticas relacionadas con la falta de transparencia, problemas legales y de violación de derechos humanos, entre otras.

Uno de los principales problemas radica en la opacidad informativa. Es difícil tratar de realizar una evaluación sólida de las mejoras que ha habido en materia de seguridad bajo el régimen de estado de excepción ya que todas las instituciones implicadas mantienen los datos bajo confidencialidad (Medrano et al., 2023, p.6). El gobierno ha bloqueado el acceso a la información pública, limitando la transparencia sobre temas críticos.

Asimismo, los datos de homicidios que se reportan también generan desconfianza, no sólo por la dificultad de acceder a datos oficiales, sino por cambios en la metodología a la hora de contabilizarlos (Salmon, 2023). Aparentemente, no se estarían incluyendo muertes durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad ni fallecimientos ocurridos bajo custodia o en prisión. Esto genera dudas sobre la integridad de los registros y la sostenibilidad de la reducción observada.

Organismos como Amnistía Internacional o la CIDH han reportado decenas de miles de detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas de personas inocentes, basadas en su edad y apariencia física, uso de tatuajes o ropas holgadas. De igual forma, se han reportado allanamientos ilegales, violaciones al debido proceso, hechos de tortura y malos tratos, y violaciones de derechos humanos a las personas encarceladas (CIDH, 2024). Como señala Medrano et al (2023, p.37), ni siquiera bajo este régimen de estado de excepción se pueden restringir los derechos humanos protegidos en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas.

Además, existen numerosas sospechas de negociaciones de altos funcionarios del gobierno con líderes de pandillas. El objetivo sería reducir la violencia homicida a cambio de beneficios penitenciarios o reducción de operativos en zonas controladas por pandillas. Incluso, “el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a funcionarios de la administración Bukele, alegando que habían negociado con líderes pandilleros” (Colocho & Olivares, 2024, p.11).

Pese a estas denuncias, los ciudadanos salvadoreños apoyan las decisiones del gobierno. Es así que, en junio de 2023 la tasa de aceptación de Nayib Bukele como presidente era del 90%, la cifra más alta de América Latina (Statista, 2024). Este respaldo está relacionado con la notable mejora en seguridad, las personas prefieren no vivir con miedo antes que los principios democráticos o las garantías individuales (Salmon, 2023). La actitud de la población salvadoreña es positiva hacia el argumento del presidente respecto a que los civiles inocentes encarcelados representan un “margen de error” aceptable (Medrano et al., 2023). Están dispuestos a tolerar ciertas injusticias a cambio de seguridad.

6. Conclusiones

Este trabajo ha analizado y evidenciado cómo la violencia y la inseguridad que esta produce, generan un obstáculo para el desarrollo económico sostenible en los países de Centroamérica. Gracias a este estudio hemos podido ver que la violencia no solo tiene consecuencias sobre la seguridad ciudadana, sino que se extiende hasta el ámbito económico: eleva los costos de transacción, favorece la expansión de mercados informales e ilegales, genera deserción escolar y migración forzada —especialmente de personas cualificadas—, y debilita significativamente la institucionalidad pública.

Al analizar los diferentes indicadores por países, hemos visto que, aunque existen diferencias entre el norte, formado por el Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- y Belice, y el sur de la región, formado por Panamá, Nicaragua y Costa Rica, la violencia es un problema compartido. Esta convierte a la Centroamérica en una de las regiones más peligrosas, con las tasas de homicidio más altas del mundo. Además, se suman delitos como robos, extorsiones, delitos sexuales y secuestros, muchos de los cuales no se denuncian por la desconfianza en las instituciones, la corrupción y la impunidad, lo que la hacen aún más insegura. Las maras o pandillas y el narcotráfico -agravado por la posición estratégica de Centroamérica como puente entre los mayores países productores y los mayores países consumidores de droga del mundo- son actores que agravan esta violencia.

Económicamente, la inseguridad desincentiva la IED, clave para el desarrollo económico sostenible. Asimismo, la violencia también repercute en el gasto público, pues estos países deben destinar una parte significativa de su PIB en seguridad, en lugar de invertirlo en sectores básicos, como salud, educación o infraestructura, lo cual limita las oportunidades de desarrollo a largo plazo.

La evolución del caso analizado de El Salvador en materia de seguridad permite observar cómo un plan ejecutado correctamente puede generar resultados con rapidez en términos de reducción de homicidios y mejoras en la percepción de seguridad ciudadana. Aunque los salvadoreños sí se muestran satisfechos con los resultados hasta el momento, cabe destacar que el caso plantea interrogantes sobre transparencia y veracidad de las medidas adoptadas. A esto se suma la preocupación expresada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos respecto a posibles violaciones de derechos fundamentales. La opacidad de los datos y la concentración del poder dificultan una evaluación objetiva del PCT a medio y largo plazo.

En definitiva, la violencia, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad generan un círculo vicioso que dificulta las posibilidades de crecimiento económico en Centroamérica. Para superar esta realidad, se deberán crear políticas públicas de seguridad que consigan ser eficaces, fortalecer las instituciones, reducir las brechas sociales y generar oportunidades económicas. La región tiene potencial para avanzar hacia un desarrollo sostenible, pero se deben realizar cambios estructurales para que esto ocurra.

7. Referencias bibliográficas

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business. <https://ia801506.us.archive.org/27/items/WhyNationsFailTheOriginsODaronAcemoglu/Why-Nations-Fail-The-Origins-o-Daron-Acemoglu.pdf>
- Aguilar, J. (2019). *Las políticas de seguridad pública en El Salvador, 2003–2018*. Heinrich Böll Stiftung. https://sv.boell.org/sites/default/files/las_politicas_de_seguridad_publica_en_el_salvador_2003-2018.pdf

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2023). *Desplazamiento en Centroamérica*. Agencia de la ONU para los Refugiados. <https://www.acnur.org/emergencias/desplazamiento-en-centroamerica>
- Alvarado, K., Reyna, V., & Escobar, V. (2022, noviembre). *Informe sobre seguridad ciudadana en El Salvador: Medición de indicadores 2021*. Plataforma por la Seguridad Ciudadana. <https://ormusa.org/wp-content/uploads/2023/06/PSC-Informe-sobre-seguridad-ciudadana-2021.pdf>
- Amnistía Internacional. (2024, 12 de diciembre). *El Salvador: Mil días de régimen de excepción, un modelo de "seguridad" a costa de los derechos humanos*. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/12/el-salvador-mil-dias-regimen-excepcion-modelo-seguridad-a-costa-derechos-humanos/>
- Arévalo, K. (2023, 26 de abril). *Estos países de Centroamérica perciben más del 20 % de su PIB de remesas*. Voz de América. <https://www.vozdeamerica.com/a/estos-paises-de-centroamerica-perciben-mas-del-20-por-ciento-pib/7067558.html>
- Asamblea Legislativa de El Salvador. (2024, 9 de marzo). *El Salvador seguirá sumando días sin homicidios con extensión del régimen de excepción*. <https://www.asamblea.gob.sv/node/13119>
- Bala, A. (2022, 9 de marzo). *Costa Rica prioriza la salud pública*. Fondo Monetario Internacional. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/09/cf-costa-rica-prioritizes-public-health>
- Banco Centroamericano de Integración Económica. (2021). *Remesas en Centroamérica: El rol del BCIE*. [https://www.bcie.org/fileadmin/user_upload/Remesas en Centroamerica el rol del BCIE.pdf](https://www.bcie.org/fileadmin/user_upload/Remesas_en_Centroamerica_el_rol_del_BCIE.pdf)
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). *Pequeños empujones para América Latina y el Caribe: Una década de mejorar la política pública con la economía del comportamiento*. <https://doi.org/10.18235/0004399>
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2024, marzo 7). *Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe*. <https://www.iadb.org/es/noticias/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe>
- Banco Mundial. (2011). *Crimen y violencia en Centroamérica: Un desafío para el desarrollo*. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7598.pdf>
- Banco Mundial. (2023a). *Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=PA-GT-CR-BZ-SV-NI-HN>
- Banco Mundial. (2023b). *Índice de Gini*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2023&locations=CR-SV-HN-GT-BZ-NI-PA&start=1999&view=chart&year=2023>
- Banco Mundial. (s.f.). *Tasa de homicidios intencionales (por cada 100.000 personas)*. Recuperado el 8 de mayo de 2025, de <https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5>
- BBC News Mundo. (2025, 17 de marzo). *Cómo es el Cecot, la megacárcel en la que Bukele encerró a los cientos de venezolanos que el gobierno de Trump deportó a El Salvador desde Estados Unidos*. <https://www.bbc.com/mundo/articles/cp8y60n4m88o>
- Cabral, R., & Saucedo, E. (2018, diciembre). *Cómo impacta el crimen en la inversión extranjera*. EGADE Ideas. <https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/investigacion/como-impacta-el-crimen-en-la-inversion-extranjera>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World inequality report 2022*. World Inequality Lab. <https://wir2022.wid.world/>
- Coase, R.H. (1937), *The Nature of the Firm*. *Economica*, 4: 386-405. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>

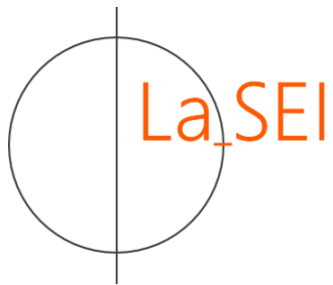
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). *Greed and grievance in civil war*. Oxford Economic Papers, 56(4), 563–595. <https://doi.org/10.1093/oep/gpf064>
- Colocho, G., & Olivares, M. (2024). *Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina y El Caribe: El Salvador*. Servicio Social Pasionista (SSPAS). https://monitorfuerzale-tal.com/docs/MFL2024_El_Salvador.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2013). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2013*. (LC/G.2613-P). <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/803aecd0-12ff-4606-91a2-32aca77ebd9f/content>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2023* (LC/PUB.2023/8-P/Rev.1). <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9a7cc765-ac4e-40dc-b69d-4ffe3cc4508e/content>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024a). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2024*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ab168ebe-f0f3-43a5-b927-6dd8f4314a4b/content>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024b). *Población en situación de pobreza extrema y pobreza en Centroamérica*. CEPALSTAT. https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=3328&area_id=927&lang=es
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017, 27 de julio). *Desplazamiento interno en el Triángulo Norte de Centroamérica*. <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/desplazamientointerno.pdf>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2024). *Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador* (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 97/24). Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2024/informe_estadoexcepcionddhh_elsalvador.pdf
- Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. (2019, agosto). *Informe final de cierre: El legado de justicia en Guatemala*. https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2019/08/InformeLegadoJusticia_SI.pdf
- Devia Garzón, C. A., Ortega Avellaneda, D. A., & Magallanes Montoya, M. J. (2014). *Violencia luego de la paz: Escenarios de posconflicto en Centroamérica*. Revista Republicana, (17), 119–148.
- Dudley, S., & Lohmuller, M. (2015, 2 de julio). *Triángulo del Norte, epicentro mundial de la extorsión*. InSight Crime. <https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/triangulo-norte-epicentro-mundial-extorsion/>
- Duque, C., & Chaves Cambronero, P. (2023, 23 de marzo). *Narcotráfico y violencia en Centroamérica*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/analysis/narcotrafico-violencia-centroamerica/>
- El Orden Mundial. (2014, 5 de febrero). *El camino de la droga*. El Orden Mundial. <https://elordenmundial.com/el-camino-de-la-droga/>
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002). *Inequality and Violent Crime*. The Journal of Law & Economics, 45(1), 1–39. <https://doi.org/10.1086/338347>
- Falkenburger, E., & Thale, G. (2008). *Maras centroamericanas: Políticas públicas y mejores prácticas*. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, (81), 45–66. <https://www.jstor.org/stable/40586320>

- Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos. (2023, marzo). *El gasto en salud debe verse como una inversión para el crecimiento y desarrollo de los países*. <https://fedefarma.org/noticias/el-gasto-en-salud-debe-verse-como-una-inversion-para-el-crecimiento-y-desarrollo-de-los-paises/>
- Forbes Centroamérica. (2022, 19 de julio). *Centroamérica, reino de la pobreza y la desigualdad social*. <https://forbescentroamerica.com/2022/07/19/centroamerica-reino-de-la-pobreza-y-la-de-sigualdad-social>
- Gaudin, Y., & Pareyón Noguez, R. (2020). *Brechas estructurales en América Latina y el Caribe: Una perspectiva conceptual-metodológica* (Documentos de Proyectos). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e6ab3765-bb01-43a7-9279-757e3a3bd747/content>
- Gurgur, T., Recanatini, F., & Kaufmann, D. (2002, 9 de enero). *Gobernabilidad y anticorrupción en Honduras: Un aporte para la planificación de acciones: Escuchando las voces de los funcionarios públicos, empresas y usuarios de servicios públicos* (Informe preliminar para discusión). Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/925311468254052735/pdf/503980WP0HN0GA1ad1honduras01PUBLIC1.pdf>
- InSight Crime. (2017, 10 de noviembre). *Perfil de Belice*. <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-belice/belice/>
- InSight Crime. (2018, 23 de mayo). *Perfil de Costa Rica*. <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-costa-rica/perfil-de-costa-rica/>
- InSight Crime. (2021, 24 de marzo). *Perfil de Panamá*. <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-panama/panama/>
- Instituto Nacional de Estadística Guatemala. (2024, 21 de agosto). *El INE presenta cifras de pobreza en Guatemala*. <https://www.ine.gob.gt/2024/08/21/el-ine-presenta-cifras-de-pobreza-en-guatemala/>
- Internal Displacement Monitoring Centre. (2024, 14 de mayo). *Global Report on Internal Displacement 2024*. <https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/>
- International Crisis Group. (2017). *Mafia of the Poor: Gang Violence and Extortion in Central America* (Report No. 62). <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/62-mafia-poor-gang-violence-and-extortion-central-america>
- International Crisis Group. (2019, October 25). *Fight and flight: Tackling the roots of Honduras' emergency* (Report No. 77). https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/077-fight-and-flight_0.pdf
- International Crisis Group. (2025, March 11). *Curbing violence in Latin America's drug trafficking hotspots* (Latin America Report No. 108). <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/columbia-ecuador-guatemala-honduras-mexico/108-curbing-violence-latin-america-drug-trafficking-hotspots>
- International Crisis Group. (2025, marzo 11). *Mitigar la violencia en los centros de narcotráfico en América Latina* (Informe sobre América Latina N° 108). <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2025-03/108-latam-drugs-violence-spanish.pdf>
- Jaramillo, C. F. (2024, 30 de enero). *La violencia y el crimen organizado, los grandes obstáculos del desarrollo en América Latina y el Caribe*. Banco Mundial. <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/violencia-crimen-organizado-desarrollo-america-latina-caribe>
- Jiménez, E. V. (2016, 30 de junio). *La violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica: una realidad que genera desplazamiento*. Papel Político, 21(1), 167–196. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-1.vtnc>

- Kraay, A., Jiang, C. N., & Romano, T. (2024). *Worldwide Governance Indicators: Interactive Data Access*. Banco Mundial. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
- Lagos, M., & Dammert, L. (2012, mayo 9). *La seguridad ciudadana: El problema principal de América Latina*. Corporación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_Seguridad_Ciudadana.pdf.pdf
- López Fuentes, D. (2024). *Transformación democrática, económica y seguridad: Evaluación del Plan Control Territorial*. Revista Con-Secuencias, (9), 17–32. https://revistacon-secuencias.com/index.php/rcs_sv/article/view/51
- Maldonado, R., & Harris, J. (2023, noviembre). *Las remesas a Latinoamérica y el Caribe en 2023: retomando el crecimiento previo*. (Nota técnica del BID No. 2845). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Las-remesas-a-Latinoamerica-y-el-Caribe-en-2023-retomando-el-crecimiento-previo.pdf>
- Martini, A. (2013, octubre-enero). Reseña de *Acemoglu, Daron y Robinson, James, Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*, Deusto, Barcelona, 2012, ps. 591. Relaciones Internacionales, (24).
- Medrano, C., Daugaard, A., & Vázquez del Mercado, G. (2023, mayo). *Gobernanza punitiva en Centroamérica: ¿Un antídoto contra la gobernanza criminal?* Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://globalinitiative.net/analysis/gobernanza-punitiva-centroamerica/?utm_source=chatgpt.com
- Ministerio de Turismo de El Salvador. (2025, 20 de febrero). *El Salvador lidera el crecimiento turístico en Latinoamérica, destaca publicación de medio internacional*. <https://www.mitur.gob.sv/el-salvador-lidera-el-crecimiento-turistico-en-latinoamerica-destaca-publicacion-de-medio-internacional/>
- Ministerio de Turismo de El Salvador. (s.f.). *Surf City*. El Salvador Travel. <https://www.elsalvador.travel/category/surfcity/>
- Mora-Rivera, J., & Morales Gutiérrez, F. J. (2018). Remesas y pobreza: una revisión teórica y empírica. *Economía: teoría y práctica*, (48), 197–229. <https://doi.org/10.24275/etypuam/nc/482018/mora>
- North, D. (1990). *Institutions and their consequences for economic performance*. The limits of rationality, 383–401.
- Odriozola Guitart, S., (2008). Análisis crítico de la teoría del capital humano: apuntes para una concepción alternativa para la construcción del Socialismo. *Economía y Desarrollo*, 143(1), 237–268. <https://www.redalyc.org/pdf/4255/425541312011.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2007, marzo). *Crimen y desarrollo en Centroamérica: Atrapados en una encrucijada*. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Central-america-study-es.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Organización Panamericana de la Salud, Programa Mundial de Alimentos & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2020). *Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe. Seguridad alimentaria y nutricional para los territorios más rezagados*. <https://doi.org/10.4060/cb2242es>
- Organización Internacional del Trabajo. (2013, noviembre). *La economía informal en Centroamérica y República Dominicana: Desarrollo subregional y estudios de caso*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@americas/@ro-lima/@sro-san_jose/documents/publication/wcms_237269.pdf

- Orozco, M. (2023). *Pairing migration enforcement with foreign policy*. The Dialogue. https://thediologue.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/02/Pairing-migration-with-us-foreign-policy_FINAL-1.pdf
- Pérez-Fuentes, D. I., & Castillo-Loaiza, J. L. (2016). Capital humano, teorías y métodos: importancia de la variable salud. *Economía, sociedad y territorio*, 16(52), 651-673. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212016000300651&lng=es&tlng=es
- Pérez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., & Niño, J. D. (2024, noviembre). *Los costos del crimen y la violencia: Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0013238>
- Plotnikov, D. (2020, 16 de enero). *El alto costo de la delincuencia en América Central*. Fondo Monetario Internacional. <https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2020/01/16/12726>
- Pradilla, A. (2020, 12 de octubre). *¿De qué huyen los centroamericanos?*. Fundación Gabo. <https://fundaciongabo.org/es/noticias/articulo/de-que-huyen-los-centroamericanos>
- Prado Pérez, R.E. (2018, enero-abril). *El entramado de violencias en el Triángulo Norte Centroamericano y las maras*. Sociológica (México), 33(93), 213-246. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732018000100213&lng=es&tlng=es
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2021). *Enfrentando los desafíos del desplazamiento forzado en Centroamérica y México: Marco regional de gobernabilidad local*. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/af758318617e66c217118bdbf0825ffb948a264edf98a690d095e4ab37b6eeec.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). *Country Insights: Human Development Index rankings*. <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks>
- Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños. (s.f.). *Salud mental*. Naciones Unidas. <https://violenceagainstchildren.un.org/es/content/salud-mental>
- Rivera, Lipselotte, Infante, Pacheco, José Manuel, Armada, Poma, Francisco Cyl, Godiño, Chumbiauca, Lesly Elizabeth, Torres, & Quispe, Bertha Nancy Larico. (2024). *El Turismo y seguridad integral en América Latina: Una revisión sistemática*. e-Revista Multidisciplinaria del Saber, 2, e-RMS06132024. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v2i.76>
- Saavedra Leyva, R. E., & Flores Orona, C. H.. (2017). *La Gobernabilidad como un determinante de la inversión extranjera directa en América Latina*. Ensayos. Revista de economía, 36(2), 123-145. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84022017000200123&lng=es&tlng=es
- Saiz, M. (2024, 1 de octubre). *El Salvador encabeza encuesta sobre percepción de seguridad, mientras Chile y Ecuador descienden*. InSight Crime. <https://insightcrime.org/es/noticias/el-salvador-encabeza-encuesta-percepcion-seguridad-mientras-chile-ecuador-descienden/>
- Salazar Alvarado, C. G. (2023, noviembre). *Políticas públicas: Seguridad de personas y bienes* [Presentación]. 50.º Seminario Internacional de Presupuesto Público, Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), Panamá. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. <https://asip.org.ar/storage/2023/11/Presentacion-Carlos-Salazar.pdf>

- Salmon, L. (2023, 20 de julio). *Nayib Bukele y el "Plan Control Territorial" (PCT) en El Salvador: que el árbol no tape el bosque*. Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI-UBA). <https://www.cepi-uba.com/post/nayib-bukele-y-el-plan-control-territorial-pct-en-el-salvador-que-el-%C3%A1rbol-no-tape-el-bosque>
- Santacruz Giralt, M. L., & Concha-Eastman, A. (2001). *Barrio adentro: La solidaridad violenta de las pandillas*. Organización Panamericana de la Salud & Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. ISBN 99923-813-2-9.
- Statista. (2024, 12 de septiembre). *Presidentes con mayor tasa de aceptación de América Latina en 2023*. <https://es.statista.com/estadisticas/1295265/tasa-de-aceptacion-de-los-presidentes-de-america-latina/>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Global study on homicide 2023*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/Global_study_on_homicide_2023_web.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Victims of intentional homicide – Dataset*. <https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims>
- Vázquez del Mercado, G., Félix, L., & Carballo, G. (2021, octubre). *Plata o Plomo: El impacto de la extorsión en las empresas centroamericanas*. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/10/5o-Reporte-CAM-OBS.pdf>
- Ver Beek, K., Fontes, A., Huyser Honig, A., & Aguilar, E. (2022). *Evaluando métodos para medir el riesgo de migración en jóvenes a causa de la violencia en Honduras*. Asociación para una Sociedad más Justa. <https://asjhonduras.com/webhn/wp-content/uploads/2022/11/RIESGO-DE-MIGRACION-A-CAUSA-DE-VIOLENCIA-1.pdf>
- World Health Organization. (2014, December 10). *Violence can affect anyone*. <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/violence-can-affect-anyone>
- World Population Review. (2025). *Murder rate by country 2025*. World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country>
- Zimmermann, J. P. (2021). *Stakeholder mapping of citizen security interventions in El Salvador*. World Bank Group. https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/citizen-security/documents.entry.html/2021/06/29/stakeholder_mappingofcitizenssecurityinterventi-9BEJ.html



Notebooks of Geopolitical Intelligence

[ISSN 2660-6267]

PUBLICACIONES DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA ECONÓMICA DE LA UAM

